

MESA ESPECIAL SEPIA XIII



**“Viene Más La Pobreza”:
Conflictos Socioambientales y Megaproyectos
de Infraestructura Vial y Energética en la
Amazonía Peruana**

ERNESTO RÁEZ LUNA



Iniciativa para la Conservación
en la Amazonía Andina - ICAA



“Viene Más La Pobreza”:
Conflictos Socioambientales y Megaproyectos
de Infraestructura Vial y Energética en la
Amazonía Peruana

Ernesto Ráez Luna



Perú: El problema Agrario en Debate, SEPIA XIII, Mesa Especial:
"Viene la pobreza": Conflictos Socioambientales y Megaproyectos de Infraestructura Vial y Energética
en la Amazonía Peruana
Ernesto Ráez. Lima
SEPIA XIII, 2009

ECOSISTEMA / IIRSA / CAMBIO CLIMATICO / DESARROLLO / BIO DIVERSIDAD / CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES / MEGAPROYECTOS / INFRAESTRUCTURA / ENERGETICO/ AMAZONIA / PERU

Copyright © 2010 Seminario Permanente de Investigación Agraria - SEPIA

Las denominaciones geográficas en este informe y el material que contiene no entrañan, por parte de las instituciones que publican este documento, juicio alguno respecto a la condición jurídica de los países, territorios o áreas, ni respecto del trazo de sus fronteras o límites.

El contenido de esta publicación solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de las organizaciones auspiciadoras. Asimismo, no son responsables de la utilización que se le pueda dar a la misma.

Publicado con el apoyo de USAID mediante la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina bajo el contrato RLAC- 00-06-00064-0. Las opiniones expresadas en el documento no necesariamente reflejan las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Seminario Permanente de Investigación Agraria - SEPIA
Jr. León de la Fuente No. 110 - Lima 17 - Perú
Telefax: (511) 264-3063
E-mail: sepia@sepia.org.pe
Web: www.sepia.org.pe

Primera edición
Lima, octubre del 2010
300 ejemplares

Producción editorial:
SEPIA

Diseño General:
Realidades S.A.
Augusto Tamayo 190 - Oficina 05, Lima 27

Impresión:
Aleph Impresiones S.R.L.
Jr. Bernardo Alcedo 559 - Lince

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2010 - 12360
ISBN: 978-612-45829-1-2
Impreso en el Perú

Índice

Presentación	9
■ Gerardo Damonte	9
■ Mariano Castro Sánchez-Moreno	13
I. Introducción	17
■ Punto de vista	21
II. Instrumentos de análisis	22
■ Ecología política y estructuras históricas	22
■ Aproximación ecosistémica	27
III. Planteamiento central	28
IV. La iniciativa de integración de la infraestructura regional en Sudamérica (IIRSA) y otros megaproyectos de infraestructura en la Amazonía peruana.	32
■ Contexto ecológico-económico de IIRSA: cambio climático y biodiversidad.	35
■ El conflicto respecto de IIRSA.	37
V. La carretera interoceánica sur	38
■ Impactos ambientales y sociales	42
■ Reacciones institucionales	43
VI. Hidroeléctrica del Inambari y similares, conflicto en ciernes	46
VII. El mito del desarrollo y sus contradicciones ocultas	48

VIII. Retos de investigación	50
■ Desarrollo nacional y modernización tecnológica e institucional.	50
■ Desarrollo nacional y posición geopolítica del Perú.	50
■ Marcos conceptuales, herramientas analíticas y movimientos sociales.	51
IX. Conclusión	52
X. Bibliografía	53
Comentarios	57
■ Iván Lanegra Quispe	57
■ Eduardo Gudynas	63
XI. Notas sobre los Autores	67

Presentación

Gerardo Damonte

Presidente del Consejo Directivo de SEPIA

En las últimas décadas los debates sobre la necesidad, beneficios e impactos sociales y ambientales asociados al desarrollo de megaproyectos tanto de extracción como de infraestructura se han multiplicado. Como señalan las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, muchos de estos debates han devenido en conflictos que se han clasificado como socio-ambientales. Sin embargo, más allá de la movilización social e interés mediático originado por dichos debates y conflictos, el análisis académico de sus causas y características está recién desarrollándose.

El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) conciente de la necesidad de contribuir con la literatura académica sobre el tema de Conflictos socioambientales y megaproyectos decidió organizar una mesa para el debate de este tema en el marco del Seminario Bianual SEPIA XIII que se realizó en la ciudad del Cuzco. La creación de este espacio de debate fue posible gracias a la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), institución que colaboró con SEPIA en la organización de este segmento del seminario. La ponencia principal de la mesa “Viene más la pobreza”: Conflictos socioambientales y megaproyectos de infraestructura vial y energética en la Amazonía Peruana, la cual tengo el agrado de presentar, estuvo a cargo de Ernesto Ráez, destacado investigador y director del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Este libro analiza el caso de los megaproyectos de infraestructura vial y energética en la amazonía peruana, con especial mención al proyecto Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica (IIRSA). Como señala el autor los conflictos socio-ambientales asociados a proyectos de infraestructura vial son atípicos en comparación a los ligados a proyectos extractivos. Sin embargo, es a partir de esta singularidad que el autor logra abordar temas sociales y ambientales sensibles, que si bien específicos en lo local, pueden llevarnos a reconocer problemas estructurales comunes a todos los grandes emprendimientos desarrollistas.

El trabajo tiene una aproximación crítica, articulando conceptos provenientes tanto de la ecología política como de las visiones eco-sistémicas en la búsqueda que integrar las distintas aristas sociales y ecológicas presentes en el desarrollo de los megaproyectos. Asimismo, este trabajo integra los niveles teóricos y empíricos de análisis al momento de explorar las distintas dimensiones del problema.

En el plano teórico el autor critica el modelo actual de globalización que implicaría no solamente la estandarización de un tipo de modelo político sino también de un modelo tecnológico de producción extractiva. Así, el proyecto del IIRSA se constituiría como un ejemplo de la imposición de modelos globales a poblaciones locales que no necesariamente comparten una misma visión de desarrollo.

En el plano más empírico el autor comienza señalando los dos factores por lo que la construcción de infraestructura de comunicación solo fue pensada como un vehículo de integración económica y de desarrollo en la amazonía peruana en el s. XX: el hecho que los grandes flujos de capital financiero mundial recién estuvieron disponibles y la nueva vocación geopolítica de Brasil que busca situarse como el eje de una integración económica y vial a nivel regional. Así, el autor argumenta que el IIRSA habría nacido como parte de un plan, expuesto en el 2000 a los países latinoamericanos, de expansión geopolítica del estado brasilero y no como parte de una estrategia peruana de desarrollo.

Asimismo, la ponencia critica la manera en que el estado peruano afronta la implementación de megaproyectos viales poniendo como ejemplo la Interoceánica Sur que se integra al eje Perú- Brasil-Bolivia, cruzando la cuenca amazónica del Madre de Dios- Madeira. Según el autor, esta cuenca cuenta con una serie de especificidades ecológicas y sociales que deberían haberse tomado en cuenta al momento de la construcción de infraestructura vial. En primer lugar, la gran biodiversidad de este espacio y su importancia fluvial y mineral en el marco de la cuenca amazónica. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del espacio físico al cambio climático, debido a que sus fuentes hídricas provienen de uno de los mayores sistemas de glaciares tropicales del mundo. En segundo lugar, el autor señala la vulnerabilidad social de esta cuenca, caracterizada por un aislamiento solo roto por episodios de penetración para la extracción de materias primas abundantes en la zona.

Es a partir de la identificación de estos hechos que este trabajo expone tanto la subordinación de intereses nacionales peruanos a planes estratégicos regionales brasileños como la poca atención que han merecido las especificidades ambientales y sociales del espacio regional de intervención. Para el caso del IIRSA el autor encuentra tres vacíos, que pienso nos muestran problemas comunes, en la implementación del proyecto: a) la ausencia de una evaluación en términos de sostenibilidad ecológica

que tome en cuenta las variables ambientales asociadas al cambio climático; b) la poca capacidad y voluntad de instalar un gobierno multilateral de los recursos transfronterizos; y c) la inexistencia a de mecanismos de participación y consulta con los actores involucrados en las transformaciones planteadas, sobre todo en lo que respecta a los colectivos indígenas.

En resumen, el trabajo de Ernesto Ráez aborda de manera acuciosa la problemática de los megaproyectos viales en la amazonía con el fin de contribuir tanto al debate sobre políticas públicas en el Perú, como al desarrollo de visiones teóricas que guíen un análisis crítico de ciertos megaproyectos. En este último punto, el autor tiene un gran mérito al buscar integrar marcos teóricos de las ciencias sociales y las ciencias naturales en concordancia con el espíritu multidisciplinario del SEPIA.

Presentación

Mariano Castro Sánchez-Moreno

Coordinador

Grupos de Trabajo ICAA

¿La investigación sobre los conflictos socioambientales es hija de la bonanza económica, de la pobreza, de los desencuentros culturales o de la crisis ambiental? Desde hace décadas en el Perú han existido conflictos vinculados con la contaminación o degradación ambiental, así como los relacionados con las condiciones del aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, no siempre los actores involucrados han logrado identificar explícita y conscientemente la gama de las cuestiones ambientales que, explícita o implícitamente, generaban estos conflictos. Con menos frecuencia, estos actores se esforzaron en transformar los conflictos ambientales hacia un proceso de paz y desarrollo que evitara, redujera o compensara los riesgos ambientales de manera clara y sostenible.

De ahí la importancia del trabajo de Ernesto Ráez, que nos presenta una perspectiva de análisis indispensable para responder más adecuadamente la pregunta, entre otras, planteada al inicio. Esta perspectiva proviene de la ecología política y con una aproximación ecosistémica. Esta perspectiva permite reforzar un proceso necesario de integración de los análisis desde la ecología con los de las ciencias sociales.

Otro aporte importante es la aplicación de esta perspectiva de análisis a los grandes proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales. Sin duda, estos proyectos son los que convocan toda la atención y prioridad política de los gobernantes. Es más, en no pocos casos, las presiones ejercidas por los titulares (políticos o empresariales) de estos megaproyectos determinan el cambio de políticas y regulaciones nacionales o sectoriales: cualquiera de estos megaproyectos implica el incremento de, por lo menos, 1 punto del PBI nacional o sectorial.

La priorización en el análisis de la relación entre los megaproyectos con los conflictos socioambientales es muy importante, debido a que no existe en la historia peruana otra época como la actual en la que se estén ejecutando tantos megaproyectos de

infraestructura y de extracción de recursos naturales de manera simultánea. En la Amazonía peruana esto es ostensible aunque, paradójicamente, menos visible para la opinión pública limeña. Muchos de los significativos impactos sociales y ambientales de estos megaproyectos serán irreversibles, cambiarán la Amazonía en los próximos años sin que, además, sus propios habitantes ni los demás peruanos hayamos sido cabalmente informados sobre este nuevo destino.

Las carencias informativas sobre la relación y características oficiales de estos megaproyectos es tan alarmante como, por ejemplo, las carencias relacionadas con un planeamiento que integre las iniciativas de los diversos sectores, que considere las necesidades nacionales del largo plazo, que involucre a los ciudadanos, y que considere el valor, y limitaciones de los servicios de los ecosistemas en los que se ejecutan simultánea e intensamente estos megaproyectos. Muchos de estos proyectos son muy necesarios, pero no hay garantías que se hagan bien ni que se asegure la sostenibilidad ambiental y social.

Probablemente una contribución para mejorar la gobernanza de estos temas, sea la aplicación efectiva de herramientas de gestión ambiental aplicables a decisiones estratégicas. Es decir, sobre actividades humanas tales como las políticas gubernamentales, y programas públicos. Es necesario que las decisiones sobre los megaproyectos aseguren el cumplimiento de las condiciones de sustentabilidad ambiental. Ejemplos de estas herramientas son la evaluación ambiental estratégica, el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica económica, y la evaluación de impactos y riesgos acumulativos. Estas y otras herramientas ya están establecidas en la Ley General del Ambiente del años 2005 y que, precisamente, se aprobó para atender los nuevos retos.

Sin embargo, para poner en marcha una regulación ambiental más efectiva es fundamental que se concrete una mayor inversión ambiental, tanto en capacidades de gestión como en infraestructura y equipamiento. Pero nada de lo anterior será suficiente si se mantienen las tendencias de escasa integración entre las políticas públicas en un marco de un modelo de desarrollo extractivista de los recursos naturales que no considera, además, las potencialidades de desarrollo local y el aprovechamiento de recursos naturales usualmente marginados.

Estas preocupaciones son las que motivaron a los grupos de trabajo de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, ICAA, para promover este trabajo en alianza con el Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA. ICAA busca fomentar la colaboración en la Amazonía Andina para el desarrollo de las capacidades locales de pueblos indígenas, microempresas, comunidades y gobiernos locales; en la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la

valorización de los servicios ambientales. ICCA cuenta con grupo de trabajo que atiende temas transversales de interés para sus más de 20 socios: comunidades locales, organizaciones indígenas locales y regionales, organizaciones gubernamentales locales, organizaciones no gubernamentales y universidades. ICAA está auspiciado por USAID y por los socios ICAA.

Agradecemos a SEPIA por la valiosa oportunidad brindada para intercambiar experiencias y reflexiones en el mundo académico de las ciencias sociales, así como a Ernesto Ráez por el valioso documento elaborado. Ambos aportes servirán para mejorar la comprensión de nuestra realidad.

“Viene Más La Pobreza”: Conflictos Socioambientales y Megaproyectos de Infraestructura Vial y Energética en la Amazonía Peruana

Ernesto Ráez Luna¹

I. Introducción

En medio de una bonanza económica cuya dimensión histórica todavía protege al país de los peores embates de la crisis financiera mundial, y en un período de democracia formal que casi alcanza la década, el Perú paradójicamente se sumerge en el malestar social y el desasosiego político. Uno de los principales indicadores de este malestar son los conflictos sociales, 273 al 30 de junio de 2009,² entre conflictos latentes y conflictos manifiestos (141 más que un año atrás); 128 de ellos (47%) socioambientales. El 5 de junio, en Bagua (región Amazonas), uno de estos conflictos —entre indígenas amazónicos y el gobierno central— estalló provocando la muerte violenta de 33 personas, un oficial de policía desaparecido y 200 heridos. Inmediatamente después, en medio de una grave crisis política, no menos de tres conflictos se han agudizado en el Sur del país (Andahuaylas, en Apurímac; Sicuani, en Cusco; y Azángaro, en Puno). Los manifestantes han bloqueado dos carreteras y un aeropuerto. Es un rasgo habitual de los conflictos contemporáneos que el sector que protesta —en general, popular—, para hacerse escuchar, tome o bloquee el acceso a instalaciones públicas: carreteras, aeropuertos, plantas de hidrocarburos. La infraestructura pública se ha convertido en el rehén que logra el milagro del diálogo y el inicio de las negociaciones.

El objetivo de esta monografía es proponer la exploración de un conjunto de temas relativamente poco tratados en el Perú, en el análisis de conflictos socioambientales,³

¹ Director de Ciencia y Desarrollo, Centro para la Sostenibilidad Ambiental – Universidad Peruana Cayetano Heredia. <eraez@csa-upch.org>. Esta monografía fue escrita el 8 de octubre de 2009.

² Defensoría del Pueblo, 2009.

³ Existe una plétora de definiciones de conflicto ambiental, de un sinnúmero de escuelas y disciplinas. Excede a este ensayo explorar y compulsar dichas definiciones. En todo caso, podemos definir “conflicto ambiental” como un estado de desacuerdo y enfrentamiento (encubierto o abierto; pacífico o violento) entre distintos actores sociales, respecto de la percepción y valoración del medio ambiente y de la naturaleza o respecto de derechos rivales de acceso a los recursos naturales, bienes y servicios ambientales, para gozarlos, explotarlos o transformarlos.

entendidos como la expresión de estructuras históricas, antes que como coyunturas. En particular, interesa aportar elementos de análisis supranacionales y sistémicos, desde una selección de conceptos y categorías que provienen de dos perspectivas convergentes, aunque muy diferentes: la ecología política y la aproximación ecosistémica. En este documento simplemente arañaré la superficie de lo que debiera ser un debate sobre los conflictos socioambientales peruanos situado en el contexto de los grandes conflictos socioambientales globales. Las preguntas serían: ¿qué elementos estructurales de orden mundial y período amplio se manifiestan en los conflictos socioambientales del Perú?; ¿hasta qué punto nos sirven estos elementos para entender los conflictos peruanos y orientar su resolución?

Para intentar responder a estas preguntas, discutiré brevemente un caso atípico de conflicto socioambiental: aquel que surge o se desarrolla alrededor de grandes inversiones de infraestructura vial y energética. Lo que hace atípicos a estos conflictos es que la inmensa mayoría de seres humanos vemos en el acceso a mejores carreteras y medios de transporte, así como a energía eléctrica continua, indicadores fundamentales de progreso y bienestar. El asfalto y la energía eléctrica son tecnologías básicas, casi derechos humanos modernos, de los que debería gozar cualquier ciudadano. Estas tecnologías benefician, simultáneamente, la vida cotidiana y la actividad económica. Además, el acceso continuo a energía eléctrica viene aparejado con el acceso mejorado a los medios de comunicación masiva y a las telecomunicaciones, es decir, a la integración ideológico-social y al ciberespacio. En esa medida, la infraestructura vial y energética es una condición tecnológica fundamental de cohesión y desmarginalización.

En consecuencia, las grandes inversiones en carreteras y plantas de energía cuentan —en principio— con una popularidad de la que no gozan las grandes inversiones extractivistas (mineras y de hidrocarburos fósiles), que son la causa de la mayoría de los conflictos. En los proyectos extractivistas, los beneficios no son inmediatamente experimentados por la población afectada. De hecho, está nutridamente documentado que las poblaciones locales cercanas a proyectos mineros y petroleros sufren con mucha frecuencia de un severo empeoramiento de su medio ambiente y su calidad de vida, como se aprecia en los casos del río Corrientes, Cerro de Pasco, Casapalca y La Oroya, entre muchos otros.

En el concepto también está implícita la degradación ambiental, su valoración y el derecho (o ausencia de derecho) de producir dicha degradación y de imponerla a otros. En el Perú, se ha hecho tópico escribir y debatir sobre conflictos “socioambientales”. Esto enriquece el concepto y dificulta su definición, al mismo tiempo. Su uso, en todo caso, se relaciona con el análisis de los movimientos sociales en el Perú, y enfoca la atención en la agencia de sectores populares rurales y urbanos. Estos sectores se organizan por fuera de los partidos políticos y los sindicatos, para reivindicar su derecho a la participación política efectiva, a la justicia social y al control territorial local de los medios de subsistencia. En ese contexto, plantean una creciente oposición a proyectos de desarrollo convencional, especialmente proyectos de extracción de recursos naturales con fines de exportación primaria. Recurrentemente, elementos de justicia ambiental, rechazo a la degradación ambiental y valoración de la naturaleza son incorporados a las plataformas de lucha de los movimientos sociales, con diversos grados de compromiso, coherencia y consecuencia. Por consiguiente, el conflicto social puede tomar, aunque sea coyunturalmente, un cariz ambiental. Ergo, se habla de un conflicto “socio-ambiental”.

Ante el contraste, cabe preguntarse porqué habría alguien de oponerse a un proyecto energético o vial. Sin embargo, la primera respuesta es bastante sencilla: los grandes proyectos viales y energéticos transforman rápidamente los paisajes. En lo ecológico y en lo social, establecen un “antes” y un “después” dramáticamente diferentes. En la transformación, algo siempre se pierde, y alguien pierde más. Esta es la gente que —en principio— se opondrá.

Pero el tema es un poco más complejo; los conflictos no se refieren exactamente a una oposición popular a los proyectos de infraestructura. La complejidad del problema fue expresada con lucidez por Feliciano Amado Chávez, de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), en una reunión nacional sobre la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA),⁴ que tuvo lugar en Lima el 18 de junio del 2009. Transcribo abajo la mayor parte de su discurso, que fue grabado, y las preguntas que ella planteó a un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (las cursivas son mías):

Yo quiero preguntarle en cuanto a si los pobladores fueron consultados para que haga concesiones, si estaban de acuerdo con este desarrollo de la infraestructura. Un punto. Otro: ¿con qué financiamiento se hacen estas concesiones y por qué tiempo? Otro: ahora, de experiencia nada más ya le voy a decir, en Ancash, con la penalidad de la empresa minera Antamina se hizo la carretera de [ininteligible] a San Martín. Esto dieron seguro también a un consorcio, muy calificado, muy evaluado. Hoy en día, esa carretera no vale para nada, ¡para nada! Los desmontes malograron el territorio adyacente. También hubo problemas de habitaciones, la gente que vivía al borde de esta carretera. Bueno, es cierto que usted dice que han hecho un reconocimiento de estas casas; pero ¿cómo lo hacen? ¡Exactamente cómo está medido, ni siquiera lo mejoran! Así le entregan a los señores que viven a la orilla del río. Igualito, ni siquiera le dan. Cuando uno reubica, lo que ha estado, igual [le dan]. Si pueden mejorar, entonces la gente se contenta con ese desarrollo; no está pensando más bien que está perjudicada. Luego, no indemnizan como debe ser. Son engañados. Ahora, en cuanto a ese trabajo no estoy contra, pero hay que ser realista: hay mucho, mucha contaminación. Y esas contaminaciones no están mitigados en estos momentos. Por eso, actualmente el calentamiento global hay; que nosotros los peruanos quizá vivamos más de cincuenta años nuestro territorio ya se va a desaparecer [...] Ahora, dice que hay quienes supervisan a esos trabajos ¿no? Pero esas supervisoras son amigos de quienes trabajan que no lo ven cómo le están echando este material, si están haciendo como han presentado en su proyecto. Y por ello es que cuando viene la lluvia, todo se abre eso que

⁴ Ver más adelante.

han hecho [...] *Entonces, hoy en día, para mí sería NO ACEPTO carretera. Que la gente camine con su caballo [ininteligible, risas] y vive feliz. Ese modo de desarrollo no debe cambiar, no debe impactar, por qué, si viene más la pobreza en vez de estar mejor, porque [al haber] carreteras ahora hay que pagar y de dónde si no hay trabajo hoy en día, si no hay trabajo pa los campesinos, de dónde tienen plata... Ahora, en cuanto a las audiencias que ustedes tienen, estas audiencias que dicen que se ha consultado, son audiencias repentinas. Llegan, dicen esto es legal. Hacen firmar la asistencia, pero se ha protestado que no quiere esa concesión minera, no quiere esa carretera. Pero como ya firmó, ya está, dice, ya apuntó, ya se aceptó. Y esas cosas son que ustedes como ministerio deben ser muy celosos en ver, no hay que pensar nada más que dar inversiones a empresas extrañas que vienen nada más chantajeando. Otro: debe hacer estas consultas, primeramente preparar al ciudadano, al campesino, nativo, primero educarlo. Antes, de educarle, antes, de hacerles conocer los tratados internacionales. También nuestra Constitución Política del Estado dice en el capítulo II de derechos humanos debe respetarse posiciones ciudadanas. Luego, esas audiencias o los facilitadores, como [también] quien va a exponer, debe dar en su propia lengua materna de cada localidad donde se va a llevar a cabo. Con este no, no estoy contra; pero [ininteligible] se debe cuidar los recursos naturales y no se debe depredar. Gracias.*

Como se ve, los cuestionamientos que se hacen a los proyectos de infraestructura (en este caso, vial) se refieren a diversos motivos, todos legítimos, cuyo rasgo común es la duda, la sensación de comunicación defectuosa, incluso deshonesta, y la consiguiente desconfianza que alimenta el rechazo. Esto se sostiene en decepciones pasadas, de las cuales se guarda una memoria infatigable. El rechazo popular es ambivalente, o más bien, condicional (“entonces, *hoy en día, para mí sería NO ACEPTO carretera*”). Pero además existe una escala mayor de incertidumbre y riesgo, que pone en tela de juicio un modo⁵ de desarrollo que otorga a las empresas privadas un control efectivo sobre el territorio.⁶ Esto se expresa en forma de preocupaciones ambientales que reflejan el temor de perder el control sobre los referentes de identidad y los medios rurales de producción, con el consiguiente empobrecimiento y marginalidad (“nuestro territorio ya se va a desaparecer [...] *Ese modo de desarrollo no debe cambiar, no debe impactar, por qué, si viene más la pobreza*”). Contrariamente a quienes sostienen que la gente pobre tiene mucho que ganar y nada que perder con ese desarrollo⁷ (y que, por consiguiente, quien se opone es un retrógrado), hay personas que opinan

⁵ Es decir, la forma de hacer las cosas, la forma de implementar el desarrollo, más que sólo el concepto de desarrollo y la ruta propuesta para alcanzarlo (que sería el “modelo”).

⁶ Esta es la definición popular de “privatización”, diametralmente distinta a la definición oficial y especializada, pero no por ello equivocada. Los desencuentros lingüísticos, la incapacidad de entenderse en el mismo idioma, son la moneda falsa con que se producen los intercambios discursivos en el Perú.

⁷ García 2007; De Althaus 2009; Vargas 2009.

que sí tienen mucho que perder. ¿Qué otra cosa sino conflicto puede surgir del abrumador desencuentro, incluso (o sobre todo) si la conversación ocurre en un escenario democrático?

Punto de vista

Nos hace falta la sana costumbre de explicar, antes de comenzar una discusión cualquiera, de dónde venimos, es decir, “por dónde vienen las balas”. No se trata de ofender a nadie con un autorretrato narcisista, sino de reconocer que todos tenemos un punto de vista y que sólo aceptando este hecho podemos comenzar a reflexionar. Entonces, antes que partir de una arrogante declaración de objetividad, uno debiera, en rigor, hacer al menos el intento de anunciar sus principales sesgos respecto del tema en cuestión. El problema es que, para un ecólogo con rudimentos de teoría sociológica, muchos sesgos y limitaciones no son inmediatamente evidentes y son más bien un constante descubrimiento.

En todo caso, en lo que sigue aplicaré —de manera, quizá, muy caprichosa— una derivación de la ecología conocida como aproximación ecosistémica y una rama de las ciencias sociales que se llama ecología política. La materia que ocupa a ambas disciplinas es la mejor comprensión y gestión social de los problemas ambientales contemporáneos. Ambas son aproximaciones teórico-prácticas, de investigación-acción. Ambas aproximaciones apuestan por la construcción de visiones solidarias de desarrollo y bienestar humanos. Común a ambas disciplinas es también una actitud crítica hacia los asuntos humanos y el actual orden mundial. Una mirada histórica y relacional.

Mi atalaya está situada en la Amazonía y lo que veo está filtrado por un compromiso explícito con la supervivencia de sus pueblos indígenas, sus culturas y territorios. Como la Amazonía es tan grande y diversa, es muy difícil para el especialista amazónico recordar que existe un más allá; tendemos a olvidar que esta región no es el universo y que lo que hemos aprendido no necesariamente se aplica fuera de ella. Pero, repito, como la Amazonía es tan amplia y heterogénea, es muy poco probable que un especialista amazónico se caiga por el borde del mundo conocido. Los especialistas amazónicos lo sabemos y lo entendemos todo, o casi todo, que no es lo mismo pero es igual.

II. Instrumentos de análisis

Ecología política y estructuras históricas

“Ecología política” es una etiqueta que ha sido entusiastamente reivindicada durante los últimos treinta años por diversos grupos e iniciativas con muy poco en común.⁸ El término se utiliza indistintamente para referirse tanto a las exploraciones teóricas sobre las relaciones entre la naturaleza y el poder, como a las ideologías y propuestas político-partidarias que tocan al medio ambiente y a la naturaleza. Esto suele causar confusión. Académicamente, la ecología política configura un vasto campo interdisciplinario que acoge aportes de todas las ciencias sociales.⁹ Aquí, me interesa reconocer dos corrientes: aquella con ascendencia marxista que parte de la economía política para atender a la naturaleza y al medio ambiente; y aquella que emplea categorías posmodernistas para criticar la división entre la naturaleza y la sociedad. En particular, para este ensayo interesa la ecología política que estudia los conflictos alrededor del medio ambiente y el acceso a los recursos naturales entre actores sociales con distintas cuotas de poder,¹⁰ y que “muestra que los conflictos ambientales son parte de enfrentamientos mayores, entre géneros, clases y razas; y viceversa”¹¹ (ver tabla I). Como en todo asunto humano, estos conflictos se expresan no sólo en términos de violencia manifiesta, sino en gran parte a través del enfrentamiento de visiones de mundo, discursos y narrativas sobre la naturaleza y la sociedad. Dominación y resistencia (cultural, territorial), marginalidad ambiental, orden mundial de acceso a los recursos naturales (como los tratados de libre comercio y agua dulce), interacciones entre lo global y lo local, y discursos rivales sobre el medio ambiente, son algunas temáticas privilegiadas por las corrientes mencionadas.

Tabla I. Definiciones de ecología política relevantes para este ensayo.¹²

Fuentes	Definiciones	Propósitos
Blaikie & Brookfield, 1987.	“[...] combina las preocupaciones de la ecología y una economía política ampliamente definida. En conjunto, abarca el constante vaivén dialéctico entre la sociedad y los recursos de la tierra, y también entre las clases y los grupos dentro de la propia sociedad”.	Explicar el cambio ambiental en términos de decisiones de producción regionales y locales, constreñidas por fuerzas globales político-económicas, principalmente en un contexto tercermundista y rural.

⁸ De manera habitual, además, “ecología política” denota asuntos diferentes en Europa y Norteamérica.

⁹ Paradójicamente, hay poca ecología en la ecología política.

¹⁰ Blaikie y Brookfield 1987; Peet y Watts 1996; Bryant y Bailey 1997; Robbins 2004.

¹¹ Robbins 2004, p.14.

¹² Adaptado de Robbins 2004. Traducción propia.

Fuentes	Definiciones	Propósitos
Greenberg & Park, 1994.	Una síntesis de la “economía política, con insistencia en la necesidad de ligar la distribución del poder con la actividad productiva y el análisis ecológico, [lo cual aporta una] visión más amplia de las relaciones bioambientales”.	“Sintetizar las preguntas centrales formuladas por las ciencias sociales acerca de las relaciones entre la sociedad humana, vista en su complejidad bio-político-cultural, y una naturaleza significativamente humanizada”.
Peet & Watts, 1996.	“Una confluencia entre una ciencia social con raíces ecológicas y los principios de la economía política”.	Localiza “movimientos que emergen de las tensiones y contradicciones de las crisis de subproducción, entiende la base imaginaria de las oposiciones y visiones de una vida mejor y el carácter discursivo de su política, y ve las posibilidades de amplificar los retos ambientales en un movimiento por el derecho a los medios que sostienen nuestra subsistencia y por la justicia social”.
Watts, 2000.	“[...] comprender las complejas relaciones entre naturaleza y sociedad a través de un cuidadoso análisis de [...] las formas de acceso y control sobre los recursos naturales y sus implicaciones para la salud ambiental y para alcanzar medios de subsistencia sostenibles”.	Explicar el conflicto ambiental, especialmente en términos de enfrentamientos sobre “conocimiento, poder y práctica” y “política, justicia y gobierno”.
Stott & Sullivan, 2000.	Busca identificar las “circunstancias políticas” que conducen a la gente a involucrarse en actividades que degradan el medio ambiente, ante la “ausencia de posibilidades alternativas”. Esto supone “la interrogación y reformulación de las narrativas ambientales aceptadas, particularmente aquellas dirigidas por los discursos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo”.	“Ilustrar las dimensiones políticas de las narrativas ambientales y deconstruir narrativas particulares para sugerir que las ideas aceptadas de degradación y deterioro pueden no ser tendencias lineales simples y predominantes”.

Un derrotero de esta ecología política atiende a los movimientos populares con reivindicaciones ambientales, o al “ambientalismo de los pobres”.¹³ Este último término se ha hecho muy popular, casi populista. Sin embargo, es muy distinto constatar que los pobres, para sobrevivir, dependen muy cercanamente de los servicios ambientales y del subsidio de la naturaleza como medios de subsistencia, que sugerir acríticamente que los pobres son ambientalistas por naturaleza, o que exista una preocupación ambiental intrínseca en las reivindicaciones populares.

Aquí, utilizaré conceptos de la ecología política derivados de la crítica posmodernista a la división sociedad / naturaleza (humano / no-humano), tal como son discutidos por Latour (1993, 2000) y Escobar (1999). En particular, la crítica al planteamiento que “bestializa” a los grupos humanos que no pueden adoptar o que rechazan el mito de la modernidad patriarcal occidental. De acuerdo con el mito, mujeres, niños y pueblos indígenas, por motivos biológicos y culturales, estarían más cerca de la naturaleza y serían, por consiguiente, menos humanos que el arquetipo moderno occidental. Esta condición menos humana (premoderna) justificaría someterlos y transformarlos. Latour demuestra la radical artificialidad del divorcio naturaleza / sociedad en la cultura occidental. Escobar analiza la aplicación del mito de la modernidad en el exterminio de los pueblos indígenas tradicionales (los “salvajes”).

Además, utilizaré el concepto de hegemonía, originalmente desarrollado por el pensador marxista Antonio Gramsci, tal como ha sido elaborado por el historiador canadiense Robert W. Cox (1983, 1986), en términos de estructuras históricas hegemónicas y no hegemónicas. En pocas palabras, una sociedad donde un grupo de poder ha obtenido dominio sobre las ideas (es decir, donde la ideología del grupo dominante ha sido acogida también por las masas), correspondería a una estructura hegemónica: al menos en apariencia, se ejerce el poder desde las convicciones compartidas, antes que desde la coerción; en todo caso, la coerción parece legítima. Hablamos de sociedades donde la amplia mayoría comparte visiones similares de bienestar, progreso y conducta moral: las teocracias, pero también las sociedades industrializadas de Norteamérica y Europa, donde el ilimitado crecimiento económico, el acceso universal a la alta tecnología y la libertad sexual personal —por ejemplo— son criterios de bienestar social universalmente aceptados y serían estructuras hegemónicas. Una sociedad así puede concentrar sus energías en proyectos de largo plazo y gran envergadura, sostenidos por instituciones y organizaciones político-administrativas de notable estabilidad. Por otro lado, en los márgenes del orden mundial, existen sociedades donde los grupos de poder siguen batallando por obtener dominio sobre las ideas, constantemente tentados a ejercer la violencia y establecer dictaduras sobre los gobernados, continuamente

¹³ Martínez-Alier 2002. El mismo autor reconoce, sin embargo, instancias de “antiambientalismo de los pobres” (ver Guha y Martínez-Alier 1997).

retados por todo tipo de grupos contestatarios: ideológicos, económicos, políticos y sociales, constantemente sometidos a valores y patrones de conducta heredados del pasado colonial. Estas serían estructuras históricas no hegemónicas, por ejemplo, nuestro querido Perú.

El país ha gozado de una nueva bonanza económica en los primeros años del siglo XXI, impulsada por los altos precios internacionales de los metales y los hidrocarburos fósiles, comparable con las históricas grandes bonanzas exportadoras (caucho, salitre, guano, harina de pescado). Siguiendo esta ola, el presidente Alan García y sus seguidores ofrecen una promesa de progreso nacional sobre la base de la aceleración del crecimiento económico. Este será obtenido con el concurso privilegiado de grandes inversiones privadas y público-privadas de extracción de recursos naturales no renovables (metales e hidrocarburos) para su exportación en forma de materias primas. El crecimiento económico debería “chorrear” o “gotear” desde la cúspide, a través de la pirámide social, hasta alcanzar incluso a los más desfavorecidos, sin necesidad de mayor inversión en la transformación institucional del Estado. En otras palabras, no se propone una transformación tecnológica y social del país hacia la modernidad (que exigiría nuevas instituciones político-administrativas, una inversión masiva en investigación científica, educación y desarrollo industrial de alto nivel), sino el aprovechamiento de la demanda externa de materias primas, como siempre se ha hecho. En el pasado, estas bonanzas beneficiaron principalmente a las plutocracias, y los acontecimientos nacionales no sugieren ahora nada diferente a una continuidad definitivamente antimoderna. Esto es lo que se ha dado en llamar el “modelo de desarrollo neoliberal”, por parte de sus denunciantes; etiqueta política que en rigor, como se ve, no corresponde. Para los defensores del “modelo”, toda observación u oposición a las grandes inversiones privadas sería, entonces, una pérdida de oportunidades y una amenaza para el desarrollo nacional. Además, dado que quienes se oponen y bloquean las grandes inversiones no pueden producir crecimiento ni “chorreo”, estarían actuando como “perros del hortelano”,¹⁴ que ni comen ni dejan comer. La violencia contra ellos (discursiva y expresa) estaría, en consecuencia, justificada: serían enemigos del interés nacional.

Lo que es importante anotar aquí es que en una estructura histórica no hegemónica, es de esperar que la población y los grupos enfrentados adopten posiciones ambivalentes y muy fluidas, incluso lógicamente incoherentes, en respuesta a las coyunturas y con el fin de prevalecer en cada oportunidad. En otras palabras, el corto plazo domina sobre el largo plazo; la táctica subvierte a la estrategia, la reacción reprime la proyección y la protesta domina a la propuesta. Como los intelectuales también formamos parte del caldo social, la tendencia generalizada será el análisis de la coyuntura y la toma

¹⁴ García 2007.

de posiciones, para lo cual la lectura de textos teóricos resulta menos útil que los noticieros y los observatorios. Seguir de cerca los conflictos, vigilarlos y estar en la jugada, resulta, naturalmente, lo más importante. Nadie se engaña: hablamos de enormes fortunas en juego. Pero también hablamos de los límites de los ecosistemas y las sociedades que funcionan en los mismos espacios donde se desea extraer dichas fortunas, y del destino de los beneficios. Esta es la madre de los principales conflictos socioambientales en el Perú.

Entonces, podemos esquematizar qué y quiénes están en juego en los conflictos socioambientales del Perú de la siguiente manera, que evidencia la ausencia de una estructura histórica hegemónica (ver tabla 2):

Tabla 2. Objetos y sujetos en los conflictos socioambientales del Perú.

Qué	Quiénes
Acceso privilegiado a los recursos naturales y los servicios ambientales.	Indígenas, principalmente amazónicos, y sectores rurales-campesinos (<i>premodernos, denunciantes explícitos del “modelo de desarrollo”, aunque no monolíticos, debido a los procesos de aculturación y migración interna, y de inserción en los mercados capitalistas, y a la compleja dinámica política de la organización indígena, donde se combinan pujas interétnicas y distintos niveles de poder y liderazgo, de lo local a lo internacional</i>).
Distribución de los beneficios derivados de explotar los recursos naturales y los servicios ambientales.	Gobierno y oligarquía nacional (<i>antimodernos, pero con un discurso modernizante, de “desarrollo”</i>).
Ideologías de desarrollo o de contestación al desarrollo; visiones de progreso y bienestar.	Instituciones financieras internacionales, cooperación internacional, grandes empresas, ambientalistas, conservacionistas, demócratas (<i>modernos, pero con sesgos e intereses diferentes e incluso opuestos</i>). Cholos, es decir, el resto de los peruanos, sobre todo urbanos (<i>ambivalentes, de manera compleja, oportunista, local y coyuntural</i>).

Aproximación ecosistémica

Demás está decir que ninguna sociedad está formada por grupos monolíticos, y que existen debates antihegemónicos incluso en las mayores capitales del mundo globalizado. Las estructuras históricas de Cox son modelos simplificados y no reflejos de la compleja realidad. ¿Cómo lidiar, entonces, analíticamente, con la complejidad?

Este será el rol de la aproximación ecosistémica, aquí empleada en la versión desarrollada por James Kay y sus colaboradores,¹⁵ que se inspira en las teorías de sistemas complejos y en la termodinámica. La aproximación ecosistémica considera sistemas complejos, por igual, a los sistemas sociales y a los sistemas naturales. Los “ecosistemas” aludidos por el enfoque no son entes puramente silvestres, sino híbridos inextricables de naturaleza y sociedad. En consecuencia, toda gestión racional de los ecosistemas debe tener en cuenta tanto las limitaciones y los ritmos, productivos y reproductivos, de los procesos biofísicos, como los intereses y perspectivas (expresados en narrativas) de los diversos actores sociales que dependen de un determinado conjunto de recursos naturales y servicios ambientales. El objetivo práctico de la aproximación ecosistémica es ayudar a construir instituciones sostenibles de gestión de recursos naturales: paisajes sostenibles, es decir, arreglos de uso de la tierra en los que, a lo largo del tiempo, no se observe una erosión biofísica ni social. En consecuencia, este enfoque contiene también una metodología para el ordenamiento territorial.¹⁶

Como en toda la ecología, la aproximación ecosistémica parte de la noción de que existen límites biofísicos inquebrantables (como la segunda ley de la termodinámica), y existen consecuencias (cadenas causa-efecto), y que estas pueden establecer ciclos en un equilibrio dinámico (retroalimentación negativa, homeostasis) o ser cíclicamente amplificadas hasta determinar cambios catastróficos (retroalimentación positiva, círculos viciosos). Características comunes a los sistemas sociales y naturales, entendidos como sistemas complejos son: la multiplicidad y la diversidad de componentes, la organización en jerarquías anidadas o escalas espacio-temporales que interactúan unas con otras (como muñecas rusas animadas), los procesos no lineales (funciones causa-efecto geométricas y exponenciales además de aritméticas, sinergias) que conducen a propiedades emergentes distintas en cada escala. Además, en todos los sistemas complejos operan el azar y la incertidumbre. Entendemos “incertidumbre” en el sentido de que no se pueden hacer predicciones exactas sobre

¹⁵ Waltner-Toews et al. 2008.

¹⁶ La distinción de los conceptos de espacio, ecosistema, paisaje y territorio, y el rol histórico político de la tecnología (vista como ideología) del ordenamiento territorial, de la gestión ambiental, del manejo de ecosistemas y de la sostenibilidad, constituyen un riquísimo curso de indagación para la ecología política y la aproximación ecosistémica. No alcanza aquí el espacio para explorarlo.

dónde y cuándo ocurrirá una crisis o transformación; pero sí es posible identificar tensiones y tendencias, calcular probabilidades y alertar sobre condiciones que pueden conducir a transformaciones catastróficas de las estructuras ecológicas y sociales. La incertidumbre se expresa también en forma de “sorpresa”: los procesos ecológicos y sociales no son lineales, de modo que cambios dramáticos pueden producirse con poco aviso previo. Existe frecuentemente un desfase severo entre los procesos sociales y los procesos ecológicos, entre “sostenibilidad” y “democracia”. Por ejemplo: las sociedades muchas veces no advierten que la catástrofe ecológica viene, hasta el día anterior.¹⁷ Un caso patente es la enorme resistencia opuesta por prácticamente todos los países para tomar medidas significativas que impidan o al menos mitiguen el calentamiento global.

En este enfoque, una transformación catastrófica —como la transformación de un bosque en una sabana; la de una sociedad rural en urbana; un cambio de tres grados centígrados en la temperatura promedio de la atmósfera terrestre— produce un nuevo estado estable de la realidad y una reorganización de los procesos biofísicos, ni mejor ni peor, en principio, que el estado anterior. La aproximación ecosistémica busca informar a la sociedad sobre sus opciones (escenarios): sobre la incertidumbre y sobre las consecuencias probables de manipular los ecosistemas. La sociedad decide qué estado de los ecosistemas es más deseable. Idealmente, esta decisión debiera ser inclusiva y solidaria, pero ese no es —por supuesto— casi nunca el caso.

III. Planteamiento central

Armado con los conceptos arriba señalados (imposible discutirlos en mayor detalle), el planteamiento central es que la Amazonía —en tanto bioma de gravitación planetaria— es escenario de una batalla definitiva, de la cual los peruanos formamos una parte decisiva. La globalización financiera y mercantil sostenida por un florecimiento tecnológico dependiente de los hidrocarburos fósiles amenaza, simultáneamente, a la homeostasis de la biósfera y a la reproducción de formas tradicionales de ser humano.

La globalización no es sólo la hegemonía del capitalismo como sistema político-económico, sino que es la globalización de una propuesta tecnológico-industrial de extraordinaria sofisticación, cuya materia fundamental es el petróleo. Esto escapa rutinariamente a los analistas que siguen viendo el mundo como una mera guerra bipolar de imperialismo y antiimperialismo. Pero la adopción de la petrotecnología

¹⁷ Advertencia aportada por Gustavo Suárez de Freitas, en una reunión preparatoria del SEPIA XIII.

es universal, no diferencia izquierdas ni derechas. El mejor mecanismo conocido para distribuir globalmente esta tecnología es el libre mercado capitalista y su mejor vehículo son las corporaciones transnacionales, privadas o estatales. En buena cuenta, es el propio capitalismo global el que ya no diferencia izquierdas ni derechas.

La globalización promueve transformaciones marcadas por la simplificación de la diversidad biológica y por la homogenización cultural. Estos no son procesos nuevos, lo nuevo es la escala planetaria y la velocidad con que la transformación ocurre, acercándonos a puntos de inflexión y a la precipitación de nuevos equilibrios estables: el calentamiento climático global, la conversión autocatalítica de los bosques tropicales en ecosistemas de sabana, la muerte de los manglares y de los arrecifes de coral (cruciales para la pesquería mundial) y la consiguiente extinción de las últimas culturas no industriales e independientes de los hidrocarburos fósiles, pero que sí dependen —para sobrevivir como etnias— de amplias extensiones de áreas silvestres y de los recursos naturales renovables bajo su control territorial. Lo nuevo, en otras palabras, es que hemos alcanzado un límite: todos los confines y ecosistemas del planeta están siendo afectados al mismo tiempo.

Sin poner en tela de juicio los maravillosos logros de la ciencia y la tecnología modernas, su extraordinaria capacidad de sustentar y prolongar la vida humana y proyectar constantemente el espíritu humano hacia nuevas fronteras, es indudable que el precio que ya pagamos por la adicción a los hidrocarburos fósiles resulta, para muchos, demasiado alto. En este carnaval, hay quizá demasiados perdedores. No todos estamos convencidos de abrazar a ciegas la alta tecnología informática y de comunicaciones, el transporte vehicular individual basado en el petróleo, el precio como sucedáneo del valor y las metrópolis como estándares únicos y exclusivos de progreso. Demás está decir que los no convencidos somos minoría.

Un motivo crucial que alimenta la duda es que —al tiempo que el acceso a la tecnología¹⁸ se democratiza como nunca antes— la desigualdad económica y social entre los seres humanos nunca ha sido mayor ni se ha ampliado con mayor velocidad. Esa desigualdad alimenta el desasosiego social y la violencia. Un segundo motivo, relacionado, es el poder decreciente del individuo humano (la persona *natural*), las familias, las comunidades locales y los estados-nación, frente a los agregados anónimos y jurídicos (metrópolis, corporaciones, sistemas financieros y mercantiles transnacionales). Un tercer motivo de duda es la intoxicación y degradación generalizada de la biósfera. Un cuarto motivo es el valor (quizá romántico, pero no por eso menos legítimo) que algunos otorgamos

¹⁸ Tanto en cuanto al acceso a productos de alta tecnología, como en cuanto a la capacidad de producir alta tecnología, los consumidores individuales y las naciones (respectivamente) operan en un paisaje mucho más nivelado que hace sólo tres décadas. Esto ocurre sobre todo en la informática y la petroquímica, pero hasta la tecnología nuclear se ha hecho más accesible.

a la diversidad cultural, especialmente aquella de los pueblos indígenas y no industriales que mantienen contacto cotidiano con la naturaleza no domesticada.

El *conflicto socioambiental central*, a fin de cuentas, es entre la promesa cierta de un desarrollo humano totalitario, con muchos perdedores absolutos y relativos —humanos y silvestres—, y la posibilidad incierta de muchas formas alternativas de desarrollo humano, con menos perdedores y mayor salud ambiental. Enfrentados a estas cuestiones, la gran mayoría de seres humanos somos ambivalentes, incluso incoherentes. En otras palabras, existe un dilema humano global, subyacente a todos los debates relacionados con el desarrollo tecnológico, del cual somos también partícipes los peruanos. Un dilema estructural-mundial; no coyuntural ni estructural privativo del ámbito nacional. Un dilema humano, y sólo en esa medida, también peruano.

La tesis planteada, entonces, es que somos, al mismo tiempo, actores locales y actores globales: que los conflictos socioambientales en el Perú no sólo manifiestan las dificultades de los peruanos para integrarse coherentemente como nación, sino una ambivalencia de toda la humanidad frente al desarrollo global. En este escenario, el Perú tiene mucho que decir, porque detenta una cuota desproporcionada de recursos naturales fundamentales. Fuera de su riqueza subterránea en hidrocarburos fósiles y minerales, contiene la cuarta extensión mayor de bosques tropicales,¹⁹ las fuentes del río más caudaloso (el Amazonas), es uno de los diez países más biodiversos y más agrobiodiversos del planeta, ostenta la mayor concentración mundial de glaciares tropicales, y sus costas son bañadas por la corriente fría de Humboldt, el ecosistema más productivo de la Tierra. (Lo verdaderamente difícil es entender que un país de tan extraordinaria riqueza natural siga atrapado en el subdesarrollo, a casi dos siglos de su independencia).

El siguiente esquema (tabla 3) intenta capturar algunos de los aspectos de esta dinámica conflictiva nacional-global y coyuntural-estructural. Planteo, como hipótesis de un trabajo necesariamente más extenso y profundo, que existe en el Perú una heterogénea atención y un conocimiento irregular de este panorama de conflictos. Sólo las celdas no sombreadas estarían bien documentadas, en el ámbito nacional. Por otro lado, se intenta enfatizar que una parte mayor de los conflictos obedece a demandas externas al país (lo cual, evidentemente, no es nada nuevo). En las páginas siguientes, presentaré tres casos de grandes proyectos de infraestructura en los que las influencias globales-regionales establecen las condiciones del conflicto en los ámbitos local-nacional, pero también nos convierten en escenario de cambios catastróficos de influencia global. Esta será la base utilizada para proponer nuevas líneas de investigación.

¹⁹ Después de Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia (en ese orden).

Tabla 3. Escalas, estructuras y cajas negras del conflicto socioambiental en el Perú.

Ámbitos →	Nacional		Internacional (regional-global)	
Cauce del fenómeno (información y análisis, en el ámbito nacional) →	Descubierto, revelado o público.	Cubierto, no revelado o marginal.	Descubierto, revelado o público.	Cubierto, no revelado o marginal.
COYUNTURAS (booms)	Gran minería e hidrocarburos fósiles.	“Pequeña” minería aurífera, colonización amazónica, coca, tala ilegal ²⁰ .	IIRSA y megaproyectos de infraestructura Energía: hidroeléctricas, agrocombustibles.	
ESTRUCTURAS SUBYACENTES	Estado débil / corrupto / “neoliberal” o pseudo-modernizante. Exclusión y marginalidad general (del pueblo).	Economías ilegales: EXCLUIDOS PERO PRÓSPEROS.	IFI ²¹ , rol de Latinoamérica en el orden mundial y el SAQUEO como INTEGRACIÓN. Potencias emergentes / BRIC ²² / (PAC ²³ - Brasil). <i>Bubbles</i> y crisis del capitalismo.	Cambios globales como límites al desarrollo humano: - Amenazas de gran escala a los ecosistemas. - Amenazas de gran escala a los pueblos indígenas tradicionales.

²⁰ Al conjunto de esta celda se lo ha llamado “antiambientalismo de los pobres”.

²¹ Acrónimo de institución financiera internacional.

²² Acrónimo de Brasil, Rusia, India y China, los cuatro grandes países emergentes cuya influencia económica, tecnológica y política ha pasado a ser mundial.

²³ Plan de Aceleración del Crecimiento, Brasil.

IV. La iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica (IIRSA) y otros megaproyectos de infraestructura en la Amazonía peruana

Tal como se planteó en la introducción, la ventaja comparativa del mundo moderno, respecto incluso del pasado muy reciente, es el acceso masivo a medios de interconexión versátiles, veloces y capaces de cubrir grandes distancias: transporte, energía y comunicaciones. Redes viales, redes eléctricas, redes de telecomunicación. Nadie —o casi nadie— puede resistirse a los innegables beneficios de tener acceso a las telecomunicaciones, a la energía eléctrica y a las carreteras. Nadie —o casi nadie— puede negarle a alguien el derecho de gozar de estas tecnologías básicas. Es imposible pensar en el progreso de un país sin una permanente mejoría de estos ladrillos básicos de la modernidad.

Su establecimiento, sin embargo, requiere de grandes inversiones de capital y de cierto grado de coordinación estatal, de una administración a otra. La popularidad masiva de estas tecnologías, su rol fundamental en la competitividad comercial de toda región y el alto costo de su establecimiento las convierten en elementos centrales de cualquier agenda política: los proyectos de infraestructura ganan elecciones; pueden, incluso, revivir la popularidad de un oficial electo en problemas.

En la historia del Perú, los grandes proyectos de infraestructura vial y energética han sido pocos y espaciados. De los once principales proyectos hidroenergéticos en desarrollo en el Perú en 1995, sólo tres superaban los mil millones de dólares de inversión.²⁴ La globalización y una conjunción de circunstancias, durante la última década, cambiaron dramáticamente esa tradición. El sistema financiero internacional globalizado otorga la capacidad de movilizar y agregar enormes cantidades de capital de inversión a gran velocidad. En los primeros años del siglo XXI, el mundo gozaba de una bonanza económica extraordinaria, en buena parte impulsada por la hoy ominosa burbuja inmobiliaria especulativa norteamericana. Enrique Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advertía sobre el riesgo representado por un “exceso de afluencia de capital” en el sistema financiero internacional.²⁵

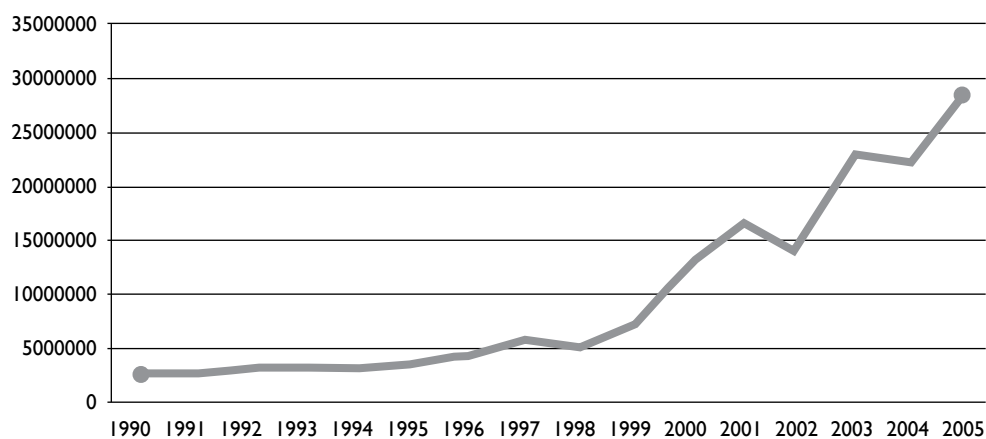
La apertura comercial de China, durante la década de 1990, impulsa nuevas fortunas y el surgimiento de una masiva clase media con una enorme demanda agregada de consumo (figura 1). En Sudamérica, Brasil —en parte por su posicionamiento como proveedor de

²⁴ Tealdo 1995.

²⁵ Iglesias 1999.

materias primas para la China en expansión— emerge como una potencia tecnológica y económica (el único país americano en el cuarteto BRIC), con una agenda ambiciosa de articulación geopolítica con sus vecinos en la subregión, especialmente con los países andino-amazónicos. Estos países controlan tres recursos fundamentales, dos de ellos concentrados en la misma cuenca amazónica compartida con Brasil: reservas de hidrocarburos, potencial hidroeléctrico y acceso al océano Pacífico. Un vistazo al mapa de Sudamérica hará evidente que el país mejor posicionado en todos esos sentidos es el Perú. Además, el país, relativamente atrasado tecnológicamente e industrialmente, es un mercado expectante para los productos industriales y los servicios tecnológicos de Brasil, especialmente la petroquímica y las megaconstrucciones.

Figura 1. Importaciones de soya en China, 1990-2005.²⁶

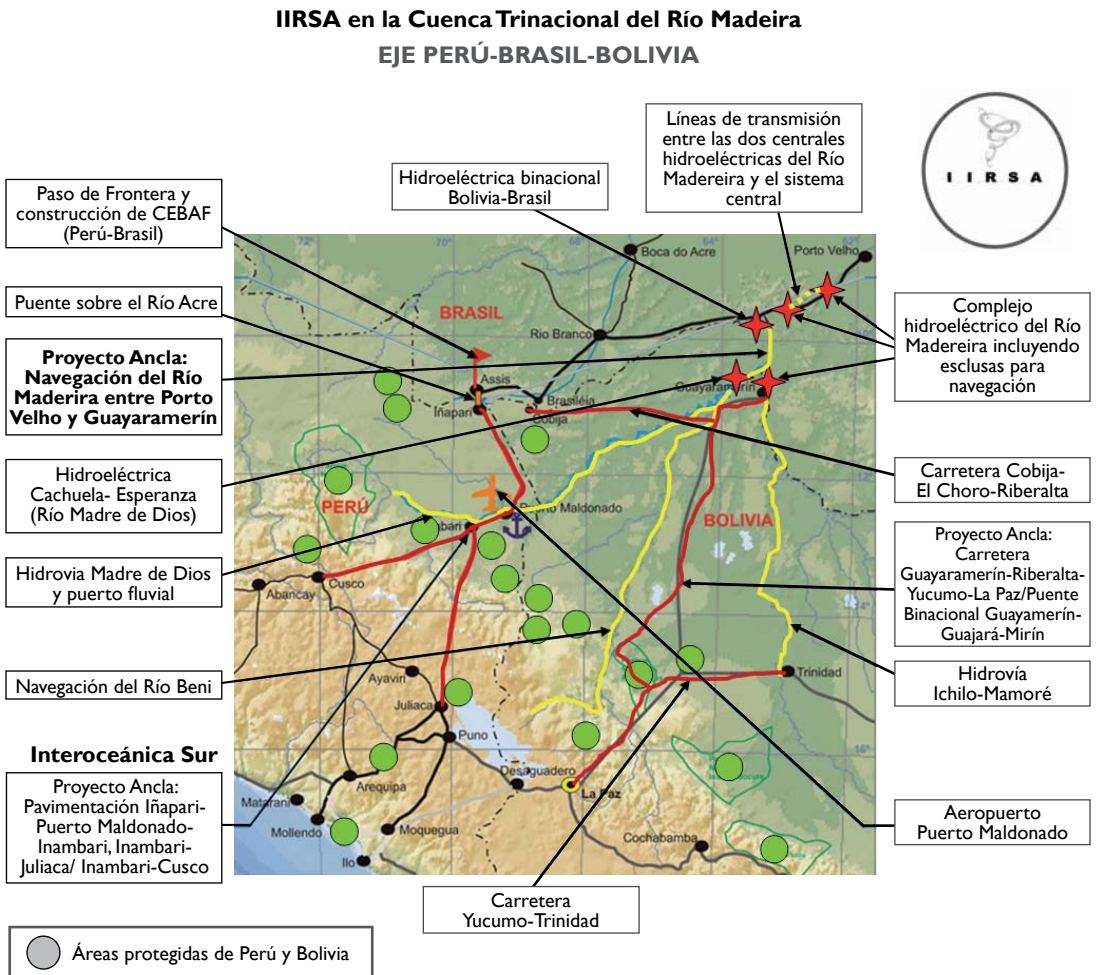


Brasilia fue la sede de la primera Cumbre de las Américas, el año 2000. Ahí se establece un fructífero triángulo amoroso entre los intereses corporativo-comerciales y geopolíticos de Brasil, la necesidad de movilizar capitales por parte de las instituciones financieras internacionales regionales y la enorme rentabilidad política de los grandes proyectos de infraestructura. (Esta rentabilidad política, bueno es recordarlo, es completamente independiente de las preferencias ideológicas —en términos de izquierdas o derechas— de los gobernantes de la región. Esta es la belleza de los megaproyectos de infraestructura). IIRSA es el nombre de guerra de la convergencia empresarial-política-financiera promovida por Brasil: Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. El raciocinio público: Sudamérica, para progresar como bloque regional competitivo en el ámbito global, precisa superar las barreras físicas que la mantienen desconectada e impiden el intercambio comercial entre naciones.

²⁶ Fuente: FAOSTAT 2008 <<http://faostat.fao.org>>.

IIRSA fue establecida por los doce gobiernos sudamericanos, con el auspicio de cuatro grandes entidades financieras: el BID, el Banco de Fomento de Brasil (BNDES), el FonPlata y la Corporación Andina de Fomento (CAF). IIRSA es una cartera de más de 350 proyectos de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, organizada por ejes geográficos. Tres de los diez ejes geográficos de IIRSA cruzan transversalmente el Perú (conocidos localmente como IIRSA Norte, Centro y Sur). En particular, el eje Perú-Brasil-Bolivia coincide con el núcleo de la Amazonía Suroccidental y la cuenca alta del río Madeira, una cuenca transfronteriza compartida por los tres países del “eje” (figura 2).

Figura 2. IIRSA en la cuenca trinacional del río Madeira.²⁷



²⁷ Fuente: website de IIRSA <www.iirsa.org> y elaboración personal.

Este conjunto de proyectos alcanza más de la mitad del costo calculado de todo el portafolio IIRSA, que suma aproximadamente 40 mil millones de dólares.²⁸ Ha sido ideado fundamentalmente para cubrir las crecientes necesidades energéticas y comerciales de Brasil, como potencia emergente. Además, las empresas constructoras más competitivas, para adelantar estos proyectos, son brasileñas. El eje Perú-Brasil-Bolivia incluye varios grandes complejos hidroeléctricos e hidrovías sobre el río Madeira y sus principales tributarios. Las represas inundarán los rápidos que obstruyen la navegación y se creará un sistema de transporte fluvial que conectará la cuenca alta del Madeira con la rama principal del río Amazonas. La hidrovía sobre el río Madre de Dios llegaría hasta la propia boca del río Manu. Estas vías acuáticas proveerán alternativas para la exportación de mercancías de Rondonia y Acre (Brasil). IIRSA proyecta construir hasta cinco hidroeléctricas en la cuenca del Madeira. Las dos más grandes (Santo Antonio y Jirau), en territorio brasileño, se encuentran en plena construcción. De acuerdo con los expertos,²⁹ los megaproyectos hidroeléctricos en los sectores brasileño y boliviano podrían conducir a una extinción masiva de la fauna acuática en la cuenca entera, en especial de los grandes bagres migratorios.³⁰ Las represas del Madeira representan una de las principales amenazas a la conservación en el continente.

A esto se suma, en el mismo eje y la misma cuenca, el mejoramiento de dos carreteras de penetración del portafolio IIRSA que unen a los Andes con la Amazonía: la carretera Interoceánica Sur (Perú) y el Corredor Vial Norte (Bolivia). La Interoceánica Sur será discutida más abajo.

Contexto ecológico-económico de IIRSA: cambio climático y biodiversidad

El contexto ecológico-económico en que se inscribe el eje IIRSA Perú-Brasil-Bolivia merece mucha atención. Como se ha dicho, su ámbito de influencia corresponde a la ecorregión de la Amazonía Suroccidental. En esta ecorregión se encuentran las fuentes del río Amazonas y se concentra la mayor biodiversidad terrestre conocida en el planeta. El núcleo de biodiversidad de la Amazonía Suroccidental, tanto en riqueza de especies como en endemismos, ocurre en las vertientes orientales andinas y en los piedemontes de Perú y Bolivia, cabeceras de cuenca del río Madeira, al sur de la ecorregión.

²⁸ De acuerdo con el Proyecto BICECA del Bank Information Center <www.bicusa.org>, sólo las represas previstas en el curso principal del río Madeira, en Brasil (Santo Antonio y Jirau), más 2,500 km de líneas de transmisión, costarían alrededor de 24 mil millones de dólares.

²⁹ Killeen 2007; Switkes y Bonilha 2008; Ribera 2008.

³⁰ Barthem y Goulding 2007.

La cuenca transfronteriza del río Madeira, compartida por Bolivia, Perú y Brasil, es la principal cuenca amazónica en superficie, aporte de agua y sedimentos fértiles. En el río Tambopata (Perú), en las cabeceras septentrionales del Madeira, se han obtenido récords mundiales en número de especies de hormigas, escarabajos, mariposas, libélulas, aves, reptiles y anfibios, entre otros organismos. Es legendario el hallazgo, en un solo árbol del valle del Tambopata, de tantas especies de hormigas como existen en todas las islas británicas. Esta extraordinaria biodiversidad se refugia parcialmente en un conjunto de áreas naturales protegidas desplegadas en la zona limítrofe entre Perú y Bolivia, que suman más de tres millones y medio de hectáreas contiguas bajo protección.

La región ha permanecido remota e inaccesible, con pocas y precarias vías de comunicación y con densidades de población humana de menos de una persona por kilómetro cuadrado. Por otro lado, la zona es muy rica en recursos naturales: gas natural y petróleo, uranio, oro aluvial y maderas preciosas, entre otros. En consecuencia, esta es una región históricamente sometida a repetidas incursiones y booms extractivistas, que en su mayor parte han sido episódicos y pasajeros, aunque han ido creando una sociedad mixta, de colonos y nativos. Los booms también han dejado importantes pasivos ambientales no mitigados.

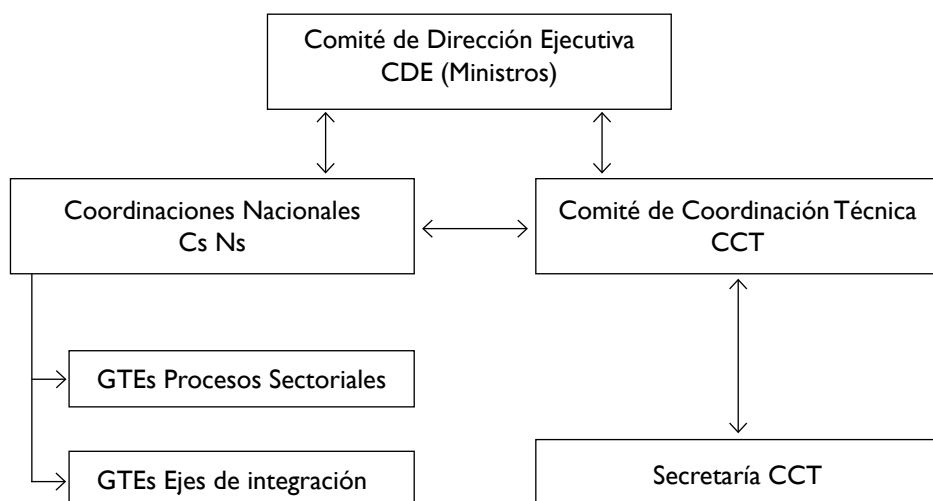
Como se mencionó arriba, las fuentes del Amazonas son alimentadas por la mayor concentración de glaciares tropicales del mundo. Debido al calentamiento de la atmósfera, estos glaciares se vienen derritiendo aceleradamente. En un primer momento, eso conduce a un aumento de los caudales de deshielo, produce crecientes anómalas y un mayor transporte de sedimentos; pero en el largo plazo, producirá una severa reducción de caudales durante la estación seca (sin lluvias) y mucha mayor estacionalidad en la disponibilidad de agua. Varios modelos climáticos predicen que la Amazonía Suroccidental será más estacional y seca en el futuro, con propensión al fuego. En consecuencia, el cambio climático global, en la Amazonía Suroccidental, podría establecer ciclos recurrentes de sequías extremas y extensos incendios forestales, seguidos de inundaciones extremas. Eso amenazaría la viabilidad ecológica de los bosques altamente biodiversos que dominan actualmente el paisaje de la ecorregión. Un avance de lo que podría venir se dio en el 2005, el año más seco en 34 años en la Amazonía Suroccidental. Los incendios forestales (provocados por quemas agropecuarias) salieron de control en la región trifronteriza de Acre (Brasil), Pando (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), y provocaron cuantiosas pérdidas económicas. El conocimiento actual sobre la dinámica del fuego en los bosques de la Amazonía Suroccidental sugiere que bastarían unos pocos eventos como el de 2005 para determinar la muerte progresiva de los bosques víctimas del fuego, incluso si los incendios fueran superficiales.³¹

³¹ Nepstad et al. 2007.

El conflicto respecto de IIRSA

Aunque hay un número considerable de proyectos parcialmente convergentes, no existe actualmente una labor coordinada, una evaluación integrada ni un monitoreo sistemático del impacto combinado de los proyectos IIRSA, otros proyectos de infraestructura y el cambio climático global, en la Amazonía Suroccidental (o en cualquier otra parte, para el caso). La coordinación de este tipo de esfuerzos desde IIRSA misma se ve efectivamente bloqueada por la forma de gobierno y toma de decisiones de IIRSA, donde no tienen cabida ni oficiales electos, ni científicos, ni indígenas, ni representantes —en general— de la sociedad civil (figura 3).

Figura 3. Organigrama de IIRSA: sin cabida para la sociedad civil.³²



Cabe entonces preguntarse, frente al surgimiento histórico de IIRSA, si en realidad esta iniciativa corresponde a una visión revolucionaria de integración regional o a la inserción definitiva de los últimos paisajes silvestres y ricos en recursos naturales de Sudamérica, en los canales globales de comercialización de materias primas.³³ En otras palabras, no integración sino penetración; no transformación revolucionaria sino la confirmación de un rol primario-exportador, en el concierto global de las naciones, para los países andino-amazónicos, en especial el Perú. Independientemente

³² Fuente: website de IIRSA < <http://www.iirsa.org/EstructuralInstitucional.asp?CodIdioma=ESP> >

³³ Zibechi 2006. Ver también los numerosos artículos de Eduardo Gudynas y sus colaboradores del Centro Latinoamericano de Ecología Social en: <http://www.ambiental.net/claes/>.

de los innegables beneficios que la red de carreteras IIRSA puede traer a pueblos hoy marginales y desconectados de los centros de poder en sus propios países, el gobierno de la iniciativa, poco transparente y reacio a la participación, le resta mérito al propósito anunciado de integración de los pueblos.

Tres retos, en suma, confrontan a IIRSA: (1) La inexistencia de una evaluación ambiental estratégica de los impactos agregados y sinérgicos de sus proyectos, en términos de sostenibilidad ecológica y con perspectiva de cuenca hidrográfica, en un contexto de cambio climático global. Al respecto, un investigador diagnostica a IIRSA como “una tormenta perfecta en la Amazonía” (Killeen 2007). (2) La inexistencia de mecanismos internacionales, en la región, que garanticen el gobierno equitativo de paisajes y recursos naturales transfronterizos, como la cuenca trinacional del río Madeira, donde los impactos de los proyectos IIRSA no sólo viajarán río abajo sino también río arriba. Al respecto, la OTCA, rehén en Brasilia, tiene muy poco o nada que aportar. (3) La inexistencia de mecanismos de transparencia, participación social y consulta previa en el gobierno de IIRSA, lo cual ha sido denunciado enérgicamente por las organizaciones indígenas amazónicas, que rechazan abiertamente a IIRSA (CAOI 2008).

Nada de esto sería de mayor preocupación para los impulsores de IIRSA, si la bonanza financiera todavía siguiera en curso, pero la burbuja ha reventado en una crisis económica global; un momento en que los financiadores observan con mucho mayor cuidado dónde ponen su dinero, y sopesan las pérdidas que un portafolio de proyectos conflictivos puede acarrearles.

V. La carretera Interoceánica Sur

El Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS, nombre oficial) o carretera Interoceánica Sur proyecta mejorar cinco tramos de carretera en el Sur de Perú (en total, unos 2,600 km de vías) que conectan la Amazonía, desde el pueblito de Iñapari en la frontera trinacional Perú-Brasil-Bolivia, hasta tres puertos sobre el océano Pacífico (Ilo, Matarani y San Juan de Marcona). Al conectar con Brasil (carreteras BR364 y BR317), la red vial establecida permitiría viajar por tierra del Pacífico al Atlántico. El área de influencia de la Interoceánica Sur incluye las regiones Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna. Este es un proyecto prioritario y proyecto ancla de la iniciativa IIRSA (Grupo 1, Eje Perú-Brasil-Bolivia: Código PBB01 / Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010: Proyecto 24). Se organiza en cinco tramos (figura 4), de los cuales el tramo 2 (Urcos – Puente Inambari), el tramo 3 (Puente Inambari – Iñapari) y el tramo 4 (Puente Inambari – Azángaro) establecen vías de penetración entre los altos

Andes y la selva sur. Todos los tramos se encuentran actualmente en construcción. Los primeros trabajos se iniciaron en el año 2006.

Figura 4. Carretera Interoceánica Sur. ³⁴



Inicialmente calculado en algo más de 892 millones de dólares (costo del asfaltado de 1,085 km de selva y puna en los tramos 2, 3 y 4), el costo final del proyecto se calcula hoy en 1,314 millones de dólares, la inversión vial más alta en la historia del Perú. Se opera bajo un modelo BOT (build-operate-and-transfer / construir-operar-y-transferir) entre el Estado y empresas concesionarias que mantendrán y operarán la vía (sujeta a peajes) durante 25 años. El esquema financiero que sostiene el proyecto es un alianza público-privada, en la que el Estado garantiza los créditos y se obliga a pagos anuales por la obra y por su mantenimiento (los PAO y PAMO), para lo cual emite a favor del concesionario certificados de deuda negociables, según avanza la obra. Estos certificados son la “moneda” con que atraer inversionistas. Las fuentes financieras, a lo largo del proyecto, han sido heterogéneas. El BNDES (Banco de Fomento de Brasil) otorgó 400 millones de dólares en 2004. De acuerdo con el Bank Information Center, una parte de este dinero fue empleada en desarrollar el proyecto. La CAF entregó 270 millones de dólares en 2004, 211 millones de dólares en 2006 y 300 millones de dólares en 2008. Merrill-Lynch, Pierce, Fenner & Smith emitieron 634 millones de dólares en bonos IIRSA Sur (2006).

³⁴ Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú.

Los tramos 2, 3 y 4 fueron concesionados en junio 2005, bajo el gobierno de Alejandro Toledo. Los otros dos tramos, en agosto 2007, bajo el gobierno de Alan García, mediando una fuerte protesta popular por el retraso. Los consorcios concesionarios de los principales tramos son liderados por empresas brasileñas:

- Consorcio CONIRSA (tramos 2 y 3): Odebrecht (Brasil), Graña y Montero, J. J. Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Perú).
- Consorcio INTERSUR (tramo 4): Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão y Camargo Correa (Brasil).
- Consorcio Interoceánica Tramo I (tramo 1): Graña y Montero, J. J. Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Perú).
- Consorcio Concesionaria del Sur (tramo 5): Hidalgo e Hidalgo, Construcción Administración y Conorte (Perú).

Dado su enorme costo y la dudosa producción exportable de las regiones a ser conectadas, la Interoceánica Sur ha sido un reclamo popular durante muchas décadas, que nunca fue atendido. Entre 1994 y 1999 se producen hasta nueve estudios de factibilidad para distintos segmentos de la obra, pero no se dan pasos decisivos. Esto cambió dramáticamente con el advenimiento de IIRSA (2000) y durante el gobierno de Alejandro Toledo. El estudio de factibilidad completo para los tramos 2, 3 y 4 se concluyó en 2004, y fue la base de licitación de las concesiones correspondientes. Sin embargo, carecía de estudios suficientes de ingeniería. Un estudio de factibilidad posterior fue comisionado por CONIRSA a la Universidad del Pacífico³⁵ y se concentró en el análisis de rentabilidad de la obra. Tanto el estudio oficial como el académico concluyen que la obra será rentable en el largo plazo; pero ambos estudios subestiman severamente la incertidumbre ecológica y social, así como las limitaciones productivas en el uso de la tierra, prevalentes en la región.

El proyecto fue declarado “de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente” por la administración Toledo, buscando congraciarse con el Sur peruano, donde se produjeron numerosas y violentas protestas populares durante su gobierno. En consecuencia, el proyecto fue exento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de un estudio de impacto ambiental (EIA) completo y de otros requisitos antes del inicio de las obras. EIA parciales y segmentarios para los tramos 2 y 3, preparados por Walsh Perú S.A., fueron aprobados en 2006, paralelamente al avance de los primeros frentes de obra. El estudio de impacto socioambiental (EISA) completo para los tramos 2 y 3 (también preparado por Walsh) se aprobó a principios del año

³⁵ Inédito. Un análisis actualizado lo ofrecen Bonifaz y Urrunaga 2009.

2008. El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (ver abajo) ofreció un conjunto amplio de observaciones y recomendaciones a este EISA, las cuales fueron transmitidas en su totalidad a CONIRSA. Estas fueron sólo marginalmente atendidas en la versión final, en parte porque los contratos contemplan ámbitos conceptualmente muy limitados de impacto ambiental, y en consecuencia no obligan a considerar, por ejemplo, impactos en el ámbito de subcuencas hidrográficas completas, sino sólo aguas arriba de la obra. El EISA del tramo 4 sufrió numerosos problemas y observaciones antes de su aprobación definitiva, en el 2008.

El esfuerzo por ingresar en la selva sur peruana se remonta a tiempos precolombinos; se intensifica a mediados del siglo XIX y se consolida a fines del siglo XX. La selva sur promete ingentes riquezas. El cultivo de café, coca, rocoto y piña en la selva alta, y la minería de maderas preciosas y oro más la recolección del caucho y la castaña en la selva baja, han impulsado la penetración y el establecimiento de poblados de migrantes que mantienen fuertes conexiones con los Andes. Durante décadas se fueron abriendo trochas y caminos carrozables entre las ciudades altoandinas de Cusco y Puno y la selva sur, caminos que fueron creciendo hasta alcanzar la frontera con Brasil. La carretera destapada resultante es extremadamente precaria, sujeta a graves interrupciones y accidentes, particularmente durante la estación lluviosa, cuando los derrumbes ocluyen la vía a veces por semanas. Los fletes son prohibitivos y el servicio de transporte deficiente. El asfaltado de esta carretera es un antiguo y justo anhelo regional.

En 2008, surgió un pasajero escándalo político, cuando se hicieron públicos el costo actualizado de la obra (>40% superior al previsto), la imposibilidad temporal de construir el principal puente de la carretera, sobre el río Madre de Dios, y las dificultades para asegurar el financiamiento. Un préstamo de la CAF y un compromiso gubernamental favorable a la obra solucionaron (protestas populares mediante) el impasse. Sin embargo, no existe ninguna evidencia sólida de que se esté intentando, en el ámbito nacional o regional, promover inversiones sostenibles y desincentivar economías destructivas en el área de influencia de la Interoceánica Sur. En cinco años de actividad del proyecto, por ejemplo, Cancillería no ha sido capaz de negociar el levantamiento de las barreras para-arancelarias que Brasil pone a los productos peruanos y al ingreso de vehículos peruanos. Las pocas iniciativas locales y privadas relevantes (tal como un audaz convenio entre CONIRSA, Odebrecht, ProNaturaleza y Conservación Internacional para promover econegocios y la protección de ecosistemas críticos en los tramos 2 y 3) no pueden reemplazar al Estado. En consecuencia, las perspectivas de aprovechar eficazmente esta cara inversión, y de mitigar de manera significativa los impactos socioambientales negativos del proyecto son muy bajas en el corto y mediano plazo. Esto ha llegado, poco a poco, a la conciencia local, inicialmente muy entusiasta defensora de la obra, en forma de incertidumbre y desencanto.

Impactos ambientales y sociales

La carretera Interoceánica Sur atraviesa los Andes de Este a Oeste y conecta virtualmente el Atlántico con el Pacífico. Facilita el acceso a las pluviselvas más extensas y mejor conservadas del planeta e influye sobre toda la cuenca hidrográfica del río Madre de Dios, en el corazón de la Amazonía Suroccidental. Como se explicó más arriba, esta región es considerada la de mayor diversidad biológica del mundo. Partiendo del pueblo fronterizo de Iñapari, la carretera transcurre sobre llanuras colinosas y de inundación de la selva baja (300 msnm) y luego asciende la vertiente oriental de los Andes, continúa al pie de nevados, arriba de los 4,000 msnm, y desciende a los valles interandinos y a la costa. En el ámbito ecorregional, el impacto ecológico de la Interoceánica Sur será sinérgico con las proyectadas represas en el río Madeira. Mientras que la carretera facilita la deforestación y la erosión en la cuenca alta, las represas impedirían el flujo de sedimentos (aumentados por la deforestación) y las migraciones de la fauna acuática a partir de la cuenca media.

La carretera atraviesa la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Pasa a tiro de piedra de la Reserva Nacional Tambopata y del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, siendo límite de sus zonas de amortiguamiento. Su área de influencia incluye los Parques Nacionales Manu y Alto Purús, la Reserva Nacional Titicaca, la Reserva Comunal Amarakaeri y numerosas concesiones de conservación y de ecoturismo en Madre de Dios. También bajo su influencia quedan numerosas comunidades nativas amazónicas, principalmente de la familia lingüística Harakmbut, restos de una nación que fue múltiple y numerosa en el río Madre de Dios y sus afluentes. En los Andes, la vía transcurre por territorios campesinos aymara y quechua.

En total ausencia de un plan de desarrollo y de inversiones, la carretera viene incentivando, por defecto, las actividades económicas ya dominantes en la región. En la zona andino-amazónica del Sur peruano, estas son la minería de oro aluvial en condiciones precarias, la tala ilegal de maderas preciosas, el cultivo de coca, el narcotráfico y el tráfico sexual (especialmente de menores). Tanto la minería como la tala ilegal ocurren frecuentemente bajo condiciones laborales caracterizadas por el trabajo forzado. Víctimas principales son los indígenas y los menores de edad. Las economías dominantes compiten excluyentemente con opciones económicas emergentes saludables, como el manejo forestal sostenible en concesiones, el ecoturismo y la agricultura orgánica.

La minería experimenta actualmente un boom producto de los precios elevados del oro, favorecido por el acceso mejorado. El bajo Tambopata y el Madre de Dios aguas abajo de Puerto Maldonado han sido saturados de dragas mineras. Numerosos pantanos de palmeras (aguajales) y lagunas meándricas (cochas) están

siendo irreversiblemente destruidos por la minería, según la búsqueda se desplaza monte adentro, socavando y derrumbando el bosque, más allá de las riberas fluviales tradicionalmente explotadas. Así, se han ampliado caminos desde la carretera principal, que atraviesan la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, para ingresar maquinaria pesada hasta el río. Actualmente existe invasión minera en las áreas protegidas Tambopata, Bahuaja-Sonene y Amaraeri, en las cuencas del Malinowski y del Colorado.

El mejoramiento de la vía ha promovido una nueva ola de inmigrantes altoandinos pobres hacia la selva baja, atraídos por las actividades extractivas y el comercio que generan. A diferencia de eventos anteriores, los inmigrantes se vienen concentrando en los centros poblados, principalmente en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. Esta pequeña ciudad enfrenta actualmente un incremento severo de la delincuencia común, conflictos prediales violentos y una total incapacidad para atender a una población en explosión.

Dos tramos de carretera cortan los bosques montanos nublados de la vertiente oriental de los Andes, en el sector más estrecho de las yungas orientales peruanas. Ambos tramos contienen enclaves activos de deforestación (Quincemil —tramo 2— y San Gabán —tramo 4—), que amenazan con establecer una doble discontinuidad ecológica en estas cabeceras amazónicas. La carretera amenaza innumerables cuerpos de agua selváticos y altoandinos, sea atravesándolos directamente o facilitando el acceso de la minería aurífera informal.

Las expectativas generadas por la carretera han acelerado la deforestación aledaña a la vía. Entre 2000 y 2005, la tasa de deforestación duplicó la tasa promedio de toda la década anterior, y la deforestación dentro de las áreas protegidas de la cuenca del Tambopata, aunque todavía pequeña en cifras absolutas, aumentó en un 62%.³⁶

Un grupo de interés maderero propone abrir un ramal de la Interoceánica que atravesará el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial Mashco-Piro, establecida a favor de indígenas aislados. Ya se han producido varios incidentes violentos entre madereros ilegales y los nativos del bosque.

Reacciones institucionales

El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur (GTSCIOS) fue establecido en noviembre 2005 por las principales ONG conservacionistas, nacionales

³⁶ CDC – UNALM et al. 2006.

e internacionales, con presencia en Madre de Dios. Sus objetivos son: contribuir a minimizar los perjuicios y a maximizar los beneficios de la Interoceánica; ofrecer información relevante sobre la Interoceánica a la ciudadanía regional y nacional; fortalecer espacios de planificación y concertación del desarrollo sostenible en el ámbito de influencia de la carretera; acompañar y vigilar la gestión social y ambiental de los impactos del proyecto ejercida por las concesionarias y por el Estado; y buscar la protección efectiva de áreas críticas de alto valor de conservación en el ámbito de influencia.

En el GTSCIOS participan actualmente cerca de medio centenar de organizaciones ambientalistas, académicas y de desarrollo rural, constituidas en cuatro grupos regionales (Madre de Dios, Cusco, Puno y Lima). El GTSCIOS está embarcado en establecer un diálogo maduro con los gobiernos regionales y con las organizaciones de base, a los cuales ha ofrecido asesoría técnica sobre la Interoceánica Sur y sus impactos. El GTSCIOS mantiene además interlocución con la CAF y con diversas instancias del gobierno nacional; en particular, con el fenecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), hoy reorganizados y parcialmente restituidos en el Ministerio del Ambiente. A esas dos organizaciones se asignó la responsabilidad de coordinar la atención de los impactos socioambientales indirectos de la carretera, a través del Programa para la Gestión Ambiental y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur, mejor conocido como “CAF / INRENA”. En afinidad con los objetivos del GTSCIOS, ProNaturaleza, en alianza con Conservación Internacional, gestionó del 2006 al 2008, en dos fases separadas, el Proyecto Interoceánica Sur. El proyecto desplegó un gran esfuerzo informativo, diplomático y organizativo en Madre de Dios, Cusco y Puno. ProNaturaleza lanzó este año un nuevo proyecto (financiado por el Fondo para Alianzas en Ecosistemas Críticos – CEPF por sus siglas en inglés) de apoyo directo al GTSCIOS. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (WCS por sus siglas en inglés) también han aportado recursos directos para el funcionamiento del GTSCIOS. El Grupo de Trabajo en Infraestructura de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (GTI – ICAA, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID por sus siglas en inglés) es también un colaborador financiero del GTSCIOS.

La única acción directa del Estado para atender los impactos negativos sociales y ambientales suscitados por la carretera es el Programa CAF / INRENA, un programa a tres años, limitado al área de influencia de los tres tramos a ser asfaltados (2, 3 y 4), con un presupuesto oficial de 17.78 millones de dólares. De esta suma, 4.33 millones corresponden a gastos recurrentes (obligaciones previstas del Estado), 3.45 millones a nueva inversión pública y 10 millones a un préstamo de la CAF. En suma, los fondos

frescos dispuestos por el Estado para atender los problemas sociales y ambientales arriba mencionados, en un territorio superior a los 100 mil km², equivalen a menos del 1.5% del costo de asfaltado. Este desequilibrio ha generado duras críticas de la sociedad civil. El programa se inició oficialmente en julio de 2006 (otorgamiento del crédito CAF), pero su estructura orgánica fue recién decretada en octubre de ese año, y sus instancias de gobierno no fueron instaladas hasta febrero 2007, tras una carta del Grupo de Trabajo a la Presidencia del Consejo de Ministros. En opinión del Grupo de Trabajo (e, inicialmente, de los gobiernos regionales de Cusco y Madre de Dios), la gestión del Programa CAF / INRENA adolece de ingobernabilidad, centralismo, poca transparencia y un endeble espíritu participativo. Esto se expresa, por ejemplo, en la elaboración de los planes operativos anuales (POA) 2006 y 2007 con una nula participación de la sociedad civil, de expertos y de autoridades regionales. Los POA 2007 han sido observados severamente por expertos y autoridades, y fueron ejecutados parcialmente, durante varios meses, sin aprobación oficial. Recién en septiembre de 2007 se incorporó al directorio del programa a los gobiernos regionales de Cusco, Puno y Madre de Dios. Esta disposición respondió a una exigencia planteada en febrero 2006 (seis meses antes) y ocurrió a pocos días de una segunda misiva del Grupo de Trabajo, dirigida al CONAM, que presidía el directorio del programa. El avance del programa de mitigación de impactos indirectos ha sido muy desigual y plagado de obstáculos institucionales y de gestión.

Es justo decir, en conclusión, que la naturaleza conflictiva de la Interoceánica Sur no corresponde a una oposición de la población, sino a un creciente desencanto por la distancia que existe entre la promesa de la carretera (desarrollo y escape de la marginalidad) y su realidad, como catalizadora —en todo caso— de los mismos procesos que ya venían produciendo pasivos socioambientales antes de la carretera. En Madre de Dios, además, la carretera ha traído sus propios problemas.³⁷ El desencanto no basta para renunciar a la carretera; pero desnuda la diferencia entre la exclusión tecnológica (solucionada por la carretera) y la exclusión estructural, sostenida por una economía regional basada en el pillaje de los recursos naturales (intercambio desigual selva-sierra-costa) y permitida por un Estado débil, sin capacidad de gobernar, sin visión estratégica de desarrollo y sin proyección territorial. Algo gravísimo en una zona de frontera que hoy recibe el interés de la principal potencia regional.

³⁷ Fernández 2008, 2009.

VI. Hidroeléctrica del Inambari y similares, conflicto en ciernes

El interés brasileño en la Amazonía peruana se vuelve a expresar, más allá de toda duda, en el reciente memorando de intenciones suscrito por los presidentes de Brasil y el Perú (28 de abril de 2009). En virtud del memorando, Brasil estudiará, financiará, construirá y operará hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano, para abastecer su propia demanda energética. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW). Según Dourojeanni (2009), el costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares. Los ashaninka del río Ene ya se han pronunciado contra uno de estos proyectos (represa de Pakitzapango), por los mismos motivos que llevaron a las recientes movilizaciones amazónicas.³⁸

La central hidroeléctrica del Inambari está proyectada en la misma cuenca del Madre de Dios / Madeira donde ya se amontona IIRSA. Se ubicará en los distritos de Camanti (provincia de Quispicanchis) en Cusco; Inambari (provincia de Tambopata) y Huepetue (provincia de Manu) en Madre de Dios; Ayapata y San Gabán (provincia de Carabaya) en Puno. Siguiendo un patrón ya establecido, la concesión inicial ha sido otorgada a un consorcio (EGASUR) formado por Constructora OAS Ltd., Eletrobras y Furnas Centrais Elétricas S.A., todas del Brasil. La central hidroeléctrica del Inambari sería la más grande del Perú y la quinta en América Latina,³⁹ con un costo calculado de 4 mil millones de dólares. Tendría una potencia instalada de 2,000 MW (casi el doble que el complejo del Mantaro, hasta ahora el mayor del Perú). La energía fluiría hacia Rio Branco (Acre, Brasil), a más de 600 km de distancia. Para producir esa potencia, se inundarían cerca de 460 km² de bosques montanos. También serían cubiertos por el agua más de 100 km de la carretera Interoceánica Sur.⁴⁰

Estos dos últimos detalles (energía para exportar y destrucción parcial de una obra popular) han generado un considerable descontento en la sociedad civil organizada del Sur, particularmente en Puno. El GTSCIOS de Puno ha producido una cartilla donde se ofrece una larga lista de los impactos negativos, directos e indirectos, que provocaría esta obra. Es en Puno donde se presionó más intensamente por la Interoceánica, y en pocos años una parte de la preciada vía sería inundada.

³⁸ “Pronunciamento de los ashaninka del río Ene sobre la hidroeléctrica de Pakitzapango”. 26 de abril de 2009. Disponible en: <http://internationalrivers.org>

³⁹ Asociación SER, OSI y Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur – Puno. 2009. “Hidroeléctrica de Inambari. ¿Para qué y para quién?”. Encarte especial en el diario Los Andes, junio, Puno.

⁴⁰ Las cifras de impacto del proyecto de ingeniería que será propuesto por las constructoras, tras el análisis de factibilidad, serán diferentes, pero cercanas en magnitud a las aquí mencionadas.

Este proyecto desnuda, más allá de toda duda, el oportunismo y la absoluta ausencia de planificación estratégica, visión territorial y coordinación intersectorial en el gobierno central. Obviamente, será necesario construir una o dos variantes viales, en plenas yungas frágiles y altamente biodiversas, con un impacto potencial mucho mayor que si se hubieran planeado ambos proyectos conjuntamente. Demuestra también la vocación dependiente y primario-exportadora del gobierno actual: Perú posee un potencial hidroeléctrico inmenso, y bastaría afectar una fracción menor de cabeceras amazónicas para producir una revolución energética e industrial en el país. Salvo, claro, que la energía se exporte a otra nación.⁴¹

En general, es de esperar que represas establecidas en vertientes empinadas tengan impactos socioambientales negativos relativamente inferiores a empresas similares en tierras llanas (el tipo de represas que establece Brasil en su propio territorio amazónico, y que promueve IIRSA). Además, la superficie de bosques afectados por la represa de Inambari será muy inferior al área de bosques afectada por la carretera Interoceánica Sur. Sin embargo, el río Inambari es un enclave cocalero y de minería aurífera aluvial, es decir, una cuenca sujeta a acelerada erosión y movilización de mercurio. La ubicación de la represa agudizaría los impactos negativos previstos para las represas del Madeira y observados para la Interoceánica Sur;⁴² un caso específico de sinergias negativas. Además, en un contexto de calentamiento global, en el que los bosques tropicales juegan un rol estratégico como fijadores de carbono, decidir inundar 40 mil hectáreas de bosques primarios y emitir metano a largo plazo —20 veces más activo que el CO₂ como gas de efecto invernadero y un subproducto frecuente en las represas—, insinúa una estulticia ecológica que alcanza el paroxismo, entre nuestros gobernantes.

El 3 y 4 de julio, en la ciudad de Puno, se celebró el IV Encuentro de Rondas Campesinas, con la presencia de más de 1,500 personas. De esta reunión, surgió una plataforma de protesta que plantea “revisar las concesiones mineras, de hidrocarburos, energéticos o hidroenergéticos como la hidroeléctrica Inambari, [y] la inmediata paralización de las actividades contaminantes (minería informal e industrial) en la cuenca del río Ramis”.⁴³ Los sectores populares, como se ve, son sensibles a la concatenación de los procesos de degradación ambiental. Por otro lado, la preocupación ambiental, sin dejar de ser genuina, es también utilizada como un estandarte político legitimador en las protestas populares. En consecuencia, la misma evidencia puede ser utilizada a favor o en contra de diferentes proyectos de desarrollo, en distintos momentos, dependiendo

⁴¹ Algo muy parecido ocurre con el gas natural, como sabemos.

⁴² Dourojeanni 2006; Fernández 2008 y 2009.

⁴³ Ruth Ccopari, “Rondas campesinas buscan representación política”. Asociación SER, 8 de julio de 2009, Puno. Disponible en: www.ser.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1061&Itemid=126

—en parte— del grado de beneficio o perjuicio que se espera del mismo. Para la población, aceptar o rechazar un proyecto depende de un equilibrio inestable entre la desconfianza y la esperanza. La carretera es inmediatamente beneficiosa para Puno; no así la hidroeléctrica. Así, la desconfianza, en este caso, podría primar sobre la esperanza.⁴⁴

Con la relativa excepción de los indígenas amazónicos, tanto en el ámbito internacional (oposición a IIRSA) como en el nacional (oposición a hidroeléctricas amazónicas), las preocupaciones de los opositores populares a los megaproyectos de infraestructura no corresponden necesariamente a la existencia de modelos alternativos de desarrollo, ni van en el mismo sentido de la evidencia científica o por lo menos documentada. Esta cumple un rol subordinado a las posiciones o puede incluso ser completamente desestimada. Mientras que la ciencia ecológica puede abrirse espacios más o menos duraderos en condiciones de estabilidad institucional, en una estructura histórica no hegemónica y conflictiva, con poderosos intereses en juego, el espacio de debate se vuelve casi exclusivamente político y defiende intereses creados económicos.

Es, sin embargo, necesario realizar esta misma constatación en más de una escala. Existen signos inequívocos de un vuelco en los equilibrios hegemónicos en el ámbito mundial; el debilitamiento de los Estados Unidos viene acompañado de la emergencia de Brasil, Rusia, India y China (los BRIC). En esta nueva estructura no hegemónica global, los extremos se tocan: el mismo desprecio ambiental expresado por la administración de George W. Bush tiene eco en el presidente Lula de Brasil, el principal promotor de las represas del Madeira. India y China aparecen como los principales opositores a las medidas internacionales contra el cambio climático propuestas por el presidente Obama en el G8 de este año. Es imprescindible preguntarnos dónde queda el Perú en este tira y afloja.

VII. El mito del desarrollo y sus contradicciones ocultas

Es posible visualizar los factores de rechazo a los proyectos de infraestructura en el Perú, como raíces que alimentan un tronco donde se entrelazan la desconfianza y el desencanto, fertilizadas por la memoria de experiencias fallidas anteriores, con proyectos “de desarrollo” en general. Tal como lo expresa Feliciano Amado, glosada al principio de este texto, son muchas y sólidas las raíces del rechazo: el desorden, la falta de coordinación y consulta con que se deciden los proyectos. El control súbito que los concesionarios privados obtienen sobre los territorios y

⁴⁴ Existe, sin embargo, una promesa de canon hidroeléctrico que podría inclinar la balanza a favor de la represa.

recursos naturales tradicionales, muchas veces colectivos. Los impactos indeseables, no previstos ni anunciados, ni adecuadamente mitigados, que sufren los paisajes y sus habitantes, irrevocablemente. La calidad frecuentemente insatisfactoria de las obras de interés público y la sospecha de contubernios y engaños entre el gobierno y los concesionarios. En todo el proceso, la manifestación repetida de los hábitos excluyentes y de marginación con que el Estado se relaciona con el pueblo. Algo que se expresa en las “consultas” apresuradas, en las que no es posible establecer diálogos constructivos ni acuerdos informados, reflexionados y vinculantes. En suma, la gente percibe eventualmente que la carretera, por ejemplo, aunque soluciona algunos problemas cotidianos, trae otros problemas y —sobre todo— muy lejos de ayudarles a superar la pobreza y la marginalidad, establece nuevas instancias de la misma, antigua, discriminación. *La gente local descubre la falacia de la infraestructura como escape de la exclusión estructural.* Este desencanto no es necesariamente suficiente para rechazar de plano la infraestructura; pero basta que los beneficios —al menos los de corto plazo— sean inciertos, para poner todo el proyecto en jaque.

Por otro lado, en un contexto en el que existe cada vez más información sobre los cambios globales y los procesos geopolíticos regionales, la transformación a gran escala (mediada por los megaproyectos) de las formas de vida humana tradicionales, la erradicación de las áreas silvestres, la llegada de *patrones extranjeros* y el surgimiento de hegemonías regionales en Sudamérica, son percibidos con gran incertidumbre y consecuentemente como grandes amenazas por los pobladores locales. Así, los convenios y las congratulaciones mutuas entre el presidente García y el presidente Lula, contrariamente a lo que probablemente espera el gobierno central, son entendidos como acuerdos en los que los intereses nacionales quedan en riesgo. La gente local, con nacionalismo popular, sospecha de la infraestructura como escape de la marginalidad estructural nacional. Este tampoco es suficiente argumento para oponerse a un proyecto determinado, pero cuando los factores (locales y nacionales) confluyen, viene el rechazo abierto. Estos elementos pueden explicar gran parte del rechazo violento a determinados proyectos, como la represa de Salcca Puqara en Sicuani.

Así las cosas, la tesis, muy difundida recientemente, de una confabulación internacional contra el Perú, con elementos subversivos nacionales de por medio, para explicar los conflictos socioambientales y el rechazo de sectores populares frente a los proyectos de desarrollo, es perfectamente posible, pero superflua. Aun en ausencia de esos actores “desestabilizadores”, existe una multitud de argumentos para explicar la oposición de los sectores populares al modelo de desarrollo y sus megaproyectos. En todo caso, los elementos antisistema estarían deslizándose sobre la ola, no sólo del descontento, sino también de la conciencia popular de un nuevo poder, garantizado por la escena democrática.

VIII. Retos de investigación

Desarrollo nacional y modernización tecnológica e institucional

Aunque la tecnología y el cambio tecnológico son temas centrales de la economía política, y son además dimensiones fundamentales del cambio global, en el Perú necesitamos todavía explorar esta dimensión, en el marco del debate sobre el desarrollo nacional. Un eje central de esta exploración debería ser el puente que la tecnología —como tema— permite establecer entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, especialmente la ecología, habituada a los conceptos de sistema, territorio, escala, límites e incertidumbre. Si la salud del planeta está en juego, como anuncia el calentamiento global, esto determina consecuencias fundamentales para cualquier visión de desarrollo nacional. Así, las alternativas de desarrollo energético no merecen meramente un debate tecnocrático, sino una indagación social y política profunda, en términos de su rol en la agudización de la exclusión y la inequidad (también ambiental) entre peruanos.

En este marco, es válido poner en tela de juicio el modelo de desarrollo planteado por el actual gobierno y por el sector socioeconómico más boyante de nuestra sociedad, pues el modelo no se sostiene sobre una visión de modernización tecnológica e institucional. Así, la infraestructura se concibe simplemente como “proyectos”, pretextos para movilizar capitales y cooptar recursos naturales, siguiendo una visión continuista de país excluyente y atrasado, exportador de sus materias y energías primas, para beneficio de una minoría. Aquí, es imprescindible conjugar esfuerzos en el análisis y la transformación del sector Energía y Minas, en el cual se concentra la abrumadora mayoría de los conflictos socioambientales (tanto los extractivos como los de infraestructura energética), y en el que se manifiesta paroxístmicamente el núcleo estructural e ideológico de la degradación ambiental con marginación social en el Perú.

Desarrollo nacional y posición geopolítica del Perú

Para hablar del desarrollo peruano, se hace imprescindible visitar la escala internacional, con plena conciencia de la localización estratégica del país en la región andino-amazónica y de los ingentes recursos de importancia global con que contamos. Sobre esa base, cabe preguntarse qué necesidad tendría el Perú de ser furgón de cola del proceso hegemónico brasileño, o de cualquier otra tentación hegemónica regional. Puesto de otro modo, una visión de desarrollo nacional debe contener una visión de la posición geopolítica que el Perú desea adquirir en el concierto de las naciones, en los ámbitos regional y mundial. La riqueza ecológica, de ubicación geográfica y de recursos naturales del Perú es la moneda a negociar. No es una moneda trivial.

En el escenario actual, es válido plantear que son los movimientos populares, con un nacionalismo fundamental (por muy infectados de caudillismo o subversión que pudieran estar), los más preocupados por el control que sobre nuestros recursos naturales estratégicos siguen obteniendo capitales y corporaciones del extranjero. Esta es una invitación a reflexionar sobre el rol de la soberanía en la visión nacional de desarrollo, en un escenario global donde todas las fronteras relevantes (ecológicas, económicas, políticas, ideológicas) ya han sido y son constantemente atravesadas, en buena parte debido al salto tecnológico sustentado en los hidrocarburos fósiles.

Marcos conceptuales, herramientas analíticas y movimientos sociales

El devenir económico y político del Perú siempre se ha dado en el contexto de sus ingentes recursos naturales, que han alimentado una bonanza frustrada tras otra (Jürgen Schuldt —2005— se pregunta si somos pobres porque somos ricos). Ahora, la enorme mayoría de los conflictos sociales, tanto en Perú como en el globo entero, giran en torno al medio ambiente y los ecosistemas. En consecuencia, será muy ventajoso insistir en la aplicación y el desarrollo de marcos conceptuales y herramientas analíticas que favorezcan el trabajo conjunto de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Este sería el caso de la ecología política y la aproximación ecosistémica, algunas de cuyas categorías han sido empleadas en esta monografía.

Un sujeto que debería ser privilegiado en el trabajo de campo y en el diálogo con la literatura mundial son los propios conflictos socioambientales, aceptados ya en el Perú, tácitamente, como híbridos de sociedad y naturaleza.⁴⁵ Los comentaristas de este libro han apuntado inquietudes muy interesantes sobre la naturaleza de nuestros conflictos socioambientales: ¿a qué se debe el fracaso de los partidos políticos para intermediar, interpretar o al menos cooptar estos conflictos?;⁴⁶ ¿por qué ni los partidos, ni los gremios ni el Estado consiguen articular el medio ambiente y nuestra diversidad natural y cultural en sus propuestas, en un país megadiverso y rico en recursos naturales?; ¿por qué los conflictos socioambientales parecen ocurrir desvinculados unos de otros, como si no existieran vasos comunicantes y procesos de aprendizaje compartido en los movimientos sociales que los impulsan? Y esta constatación (si se comprueba válida), ¿apunta a alguna condición estructural o indica una fase primordial en la regeneración o metamorfosis “ambiental” del movimiento popular?⁴⁷

⁴⁵ ¿Quizá, como el burgués gentilhomme de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, hablamos en posmoderno sin tampoco saberlo (es decir, acriticamente)?

⁴⁶ Algo dolorosamente evidente en el conflicto indígena suscitado por la “Ley de la Selva” y en la crisis de Bagua.

⁴⁷ Un fértil punto de partida —entre muchos otros posibles— lo aportan ya Anthony Bebbington y sus colaboradores (ver Bebbington y Humphries 2009; Bebbington et al. 2008).

IX. Conclusión

Los conflictos socioambientales alrededor de proyectos de infraestructura, en el Perú, se desarrollan simultáneamente en varias escalas de realidad espacio-temporal y en distintos niveles de conciencia estratégica. A un nivel superficial, toda infraestructura provee beneficios dramáticos y rápidos. Esto garantiza su buen recibimiento por la población mayoritaria y positivos réditos políticos, de corto plazo. Sin embargo, en la medida que los proyectos de infraestructura no responden genuinamente a una planificación concertada del desarrollo ni a una agenda estructurada de superación de la marginalidad, la armonía entre la población local y las autoridades alcanzada por los proyectos es extremadamente frágil. La población desconfía de la veleidosa voluntad política que sostiene el proyecto. Además, según avanza el tiempo, la población descubre —con mayor o menor lucidez— que la infraestructura no cambia las relaciones estructurales de intercambio desigual con la metrópoli, la marginación histórica ni la débil e incoherente presencia del Estado. El desencanto toma posesión de la población. Dada la coyuntura adecuada, este desencanto puede desembocar en abierto rechazo. Esto ocurre en el caso de los actuales proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, donde se sabe que la energía será ofertada principalmente al Brasil. Eso pone también en tela de juicio la visión de desarrollo nacional y de posicionamiento geopolítico del gobierno central. La palabra *desarrollo* tiene grietas visibles, que inspiran desconfianza popular.

En consecuencia, es recomendable fortalecer las indagaciones sobre las visiones de desarrollo en el Perú, y sobre el rol de nuestros ecosistemas en dicho desarrollo. Para ello, propongo incorporar marcos conceptuales que integren ciencias sociales con ciencias naturales, para tomar el concepto de desarrollo nacional desde la perspectiva de la modernización tecnológica (incluida la infraestructura) nacional y desde la pregunta sobre la posición geopolítica que debiera obtener un Perú “desarrollado”, no sólo en la región, sino en el (des)concierto de las naciones.

X. Bibliografía

- Althaus, Jaime de. 2009. "Contraofensiva urgente". En *El Comercio*, 26 de junio, Lima.
- Barthem, R. y M. Goulding. 2007. "Parecer sobre os estudos ambientais (EIA-Rima e complementações), referentes ao tomo-B volume 5/8 – EIA e ás medidas mitigadoras e compensatórias e programas ambientais do tomo-C, Itens 15 e 16". Documento digital inédito.
- Bebbington, A. y D. Humphries. 2009. "Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú". En *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 35: 117-128. Quito: Flacso.
- Bebbington, A., R. Abramovay y M. Chiriboga. 2008. "Social movements and the dynamics of rural territorial development in Latin America". En *World Development* 36 (12): 2874-2887.
- Blaikie, P. y H. Brookfield. 1987. *Land degradation and society*. Londres y Nueva York: Methuen & Co. Ltd.
- Bonifaz, J. L. y R. Urrunaga. 2009. *Beneficios económicos de la carretera Interoceánica*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Bryant, R. L. y S. Bailey. 1997. *Third world political ecology*. Londres: Routledge.
- CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. 2008. "Resolución de pueblos indígenas sobre IIRSA. La Paz, 19 de enero". Disponible en: <http://www.coica.org.ec/sp/noticias/archivo2008/iirsacaoi.htm>
- CDC – UNALM (Centro de Datos para la Conservación del Perú) et al. 2006. *Hacia un sistema de monitoreo ambiental remoto estandarizado para el SINANPE: piloto IV - Parque Nacional Bahuaja Sonene, Reserva Nacional Tambopata y Reserva Comunal Amarakaeri (2000-2005)*. Lima: Universidad Nacional Agraria.
- Cox, R.W. 1983. "Gramsci, hegemony, and international relations: an essay in method". En *Millenium* 12 (2): 162-175.
- Cox, R.W. 1986. "Social forces, states, and world order". En *Review of International Studies* 18: 161-198.

- Defensoría del Pueblo. 2009. *Reporte de conflictos sociales*, núm. 64, junio 2009. Lima.
- Dourojeanni, M. 2006. *Estudio de caso sobre la carretera Interoceánica en la Amazonía Sur del Perú*. Lima: Bank Information Center y Conservación Internacional.
- Dourojeanni, M. 2009. “Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana”. Documento digital bilingüe (español e inglés). 3 de junio, Lima.
- Escobar, A. 1999. *El final del salvaje*. Bogotá: CEREC e ICAN.
- Fernández, L. 2008. “Desarrollo territorial en la región Madre de Dios: análisis de los impactos socioambientales de la carretera Interoceánica Sur”. Tesis para optar el grado de magíster. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Fernández, L. 2009. *Diagnóstico de los impactos integrados de la carretera Interoceánica Sur en la región Madre de Dios*. Lima: Wildlife Conservation Society.
- García, A. 2007. “El síndrome del perro del hortelano”. En *El Comercio*, 28 de octubre, Lima.
- Greenberg, J. B. y T. K. Park. 1994. “Political ecology”. En *Journal of Political Ecology* 1: 1-12.
- Guha, R. y J. Martínez-Alier. 1997. *Varieties of environmentalism. Essays North and South*. Londres: Earthscan.
- Iglesias, E. V. 1999. *Cambio y crecimiento en América Latina, 1988-1998*. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC.
- Killeen, T. 2007. *Una tormenta perfecta en la Amazonía. Desarrollo y conservación en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)*. Washington, D. C.: Conservación Internacional.
- Latour, B. 1993. *We have never been modern*. Cambridge: Harvard University Press.
- Latour, B. 2000. *Politics of nature: how to bring the sciences into democracy*. Cambridge y Londres: Harvard University Press.
- Martinez-Alier, Joan. 2002. *The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Cheltenham (UK): Elgar Publishing Ltd.

- Nepstad, D., C. M. Stickler, B. Soares-Filho y F. Merry. 2008. *Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term forest tipping point*. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 27 mayo 2008 363: 1737-1746.
- Peet, R. y M. Watts. 1996. "Liberation ecology: development, sustainability, and environment in the age of market triumphalism". En R. Peet y M. Watts (eds.) *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge, New York.
- Ribera, M. O. 2008. *Las represas del Madeira: mega impactos en la Amazonía*. La Paz: LIDEMA.
- Robbins, P. 2004. *Political ecology*. Padstow (UK): Blackwell.
- Schuldt, J. 2005. *¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Stott, P. y S. Sullivan (eds.) 2000. *Political ecology: science, myth and power*. Londres: Arnold.
- Switkes, G. y P. Bonilha. 2008. *Águas turvas: alertas sobre as consequências de barrar o maior afluente do Amazonas*. Sao Paulo: International Rivers.
- Tealdo, A. 1995. *Proyectos de irrigación en el Perú: situación, análisis y políticas*. Buenos Aires: Clacso.
- Vargas, Mario. 2009. "Victoria pírrica". En *El Comercio*, 28 de junio, Lima.
- Waltner-Toews, D., J. J. Kay y N.E. Lister (eds.) 2008. *The ecosystem approach: complexity, uncertainty, and managing for sustainability*. Columbia University Press, New York.
- Watts, M. J. 2000. "Political ecology". En E. Sheppard y T. Barnes (eds.), *A companion to economic geography*. Malden (MA): Blackwell.
- Zibechi, Raúl. 2006. "IIRSA: la integración a la medida de los mercados". Programa de las Américas, 13 de junio. Disponible en: <http://www.ircamericas.org/esp/3314>

Comentarios

Iván Lanegra Quispe*

Recientemente, distintos actores políticos, económicos y sociales del país han prestado atención creciente al problema de la conflictividad social en el Perú. Esto ha motivado una discusión pública sobre cómo enfrentar dicha situación, lo cual a su vez ha revelado, de forma explícita o implícita, la concepción que tienen distintos actores sobre las causas, consecuencias y dinámica de los conflictos. En dicho marco, la ponencia de Ernesto Ráez Luna aporta a dicha discusión, enfocándose en un grupo de actividades que hasta el momento habían sido vistas como actividades “menos conflictivas” en la medida que parecían aportar claros beneficios locales, a pesar de sus potenciales impactos ambientales. Nos referimos al caso de la infraestructura vial y energética. A partir de dicho análisis, propone enfocarnos en las “estructuras históricas” subyacentes y en los “elementos estructurales del orden mundial”, más que en las “coyunturas”. Su tesis central es que somos al mismo tiempo, actores locales y globales, y la conflictividad socioambiental expresa tanto las dificultades para integrarnos los peruanos como nación como la ambivalencia de la humanidad frente al desarrollo global.

¿Qué se juega en un conflicto social relacionado con lo ambiental?

Desde luego, no es posible partir de una discusión como esta sin tener en claro algunos conceptos operativos esenciales. En primer lugar, es necesario definir qué es un conflicto social. Ráez no aborda directamente el punto, pero pareciera identificar como tal una situación de injusticia social que se expresa en la manera como los seres humanos nos relacionamos. Esto sería la causa “subyacente”. No obstante una definición operativa es la que recoge la Defensoría del Pueblo, para quien aquel es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben

* El presente texto sólo expresa la opinión del autor. No compromete a ninguna de las instituciones a las cuales pertenece.

que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios, siendo que esa contradicción puede derivar en violencia.

Desde luego, una aproximación inicial de este tipo requiere agregar lo “ambiental” como centro o aspecto central de la disputa que origina el conflicto social. Por ambiental, entendemos los distintos recursos naturales o su interacción ecosistémica, que conforman el medio en el cual es posible la vida humana en condiciones adecuadas. Aquí se plantean dos problemas. ¿Qué bienes conforman el ambiente? Y segundo, ¿cuáles son esas condiciones “adecuadas” que nos permiten separar los aspectos relevantes del ambiente? Es evidente que las condiciones bajo las cuales puede vivir hoy el ser humano son sustancialmente diferentes a las que “naturalmente” presentes cuando la especie apareció hace más de 100,000 años. El hombre ha ocupado nuevos espacios, apelando a la tecnología. Sin embargo, existen condiciones básicas, sin las cuales no es posible la supervivencia, incluso en el corto plazo. Por ejemplo, aire, agua, alimentos. No obstante, sobreviviendo en el corto plazo, tendremos vidas más cortas en el mediano y largo plazo si el ambiente no es el adecuado.

De otro lado, estas condiciones ambientales pueden estar referidas a recursos denominados “naturales”, que están disponibles sin la necesidad de “producción humana”. Estos recursos pueden adoptar distintas valoraciones conforme son incorporados como insumos a los procesos económicos, o como elementos con valor social o cultural independiente. En síntesis, las condiciones “adecuadas” se definen dentro de una compleja intersección que incluye la calidad y cantidad de los bienes necesarios para la supervivencia humana, la disposición de dichos bienes para las actividades socioeconómicas de las que dependen ciertos grupos sociales, y el valor cultural asignado a ellos.

Luego de las breves precisiones conceptuales hechas, buscaremos dar respuesta a la pregunta ¿qué empuja a un determinado colectivo social a ingresar en la dinámica de un conflicto, en el caso particular de aquellos de carácter “ambiental”? No es el daño o riesgo objetivo ni su sola percepción lo que impulsa a la acción colectiva. Es fundamental que el bien ambiental sea “valorado”, es decir que sea o se vuelva “significativo” para los actores. Esta valoración no tiene un solo sentido. Es decir, puede reflejar múltiples intereses. Consideramos que son tres los supuestos que explican, al menos para el caso peruano, la mayoría de los casos. En primer lugar, el valor económico de los bienes. El bien ambiental es considerado esencial para actividades económicas a las que a su vez se les asigna un gran valor. Esto vale tanto para el campesino que considera el agua, y con razón, un insumo central de su actividad. Y también para la empresa que necesita de esa misma agua para darle viabilidad a su proyecto productivo. Estas valoraciones no tienen porque ser simétricas, ni tienen que expresarse siempre en valores monetarios.

Un segundo elemento, es la protección directa de la salud y la vida. Es decir, se valora un bien porque su deterioro o desaparición puede poner en riesgo la integridad de las personas. Un tercer elemento, es la incorporación del bien ambiental a la identidad colectiva. No se trata sólo de una visión religiosa. Consiste en una valoración que conlleva puntos de referencia de la persona y del grupo respecto del territorio y de sus formas de vida. La intensidad y variedad de esta preocupación pueden variar, y ser en algunos casos incluso más fuerte que los dos temas anteriores.

Sin embargo, dependiendo de la intensidad de los aspectos involucrados, los actores están por lo general dispuestos a admitir compensaciones, es decir, cambiar ciertos bienes por otros. Es aquí donde lo “ambiental” interactúa con más fuerza con otros componentes, en particular los sociales y económicos. Al mismo tiempo, los actores también definen puntos que podríamos llamar “irrenunciables” que dificulta el llegar a acuerdos, o que los hacen más costosos.

Es muy importante entender que los discursos de los actores, dentro y fuera del conflicto social, pueden aludir a algunos de los aspectos descritos o a todos, pero eso no implica necesariamente que el riesgo o el daño sean reales, desde una perspectiva científica o técnica, o incluso desde una objetiva valoración cultural. Por ejemplos, los actores podrían referir al valor “inestimable de un río, que es sagrado para nosotros” y sencillamente faltar a la verdad, o exagerar el valor que los actores asignan a los bienes. Pero esto no debería sorprendernos. Cuando negociamos, solemos decir que las cosas que ofertamos tienen más valor de lo que efectivamente les damos. Y lo mismo para aquel que demanda. Se minimiza su “valor” o se considera poco relevante el “valor” dado por otros. Debemos insistir aquí en que no estamos aludiendo a “valores monetarios” ni siquiera sólo a los “económicos”.

Ahora, los contextos estables, en los cuales las transformaciones económicas, sociales y políticas que promueven la necesidad de nuevos arreglos o “negociaciones” respecto de los bienes ambientales son más bien muy lentas o imperceptibles, no son los que en principio contribuyen a una alta conflictividad socioambiental. Son los escenarios de cambios rápidos los que suelen presentar una mayor tendencia para tales efectos. Estas transformaciones no tienen que tener necesariamente un signo positivo o negativo. No es eso lo que genera las condiciones para la conflictividad, sino la incapacidad social de poder llegar a arreglos a la misma velocidad con que se generan los cambios. Y desde luego, también depende de las estrategias de los actores frente a las restricciones y oportunidades que enfrentan ¿En qué contexto se vive la conflictividad socioambiental en el Perú?

Recursos Naturales, Instituciones y Desarrollo

Cómo señala Ráez, las recientes administraciones gubernamentales han buscado integrarse a un contexto global complejo, agresivo y cambiante. La estrategia principal durante las últimas dos décadas ha sido la de aprovechar al máximo los recursos naturales de que dispone el Perú, lo cual, en un contexto de restricción de recursos por parte del Estado y de percepción generalizada sobre la ineficiencia del sector público, llevó a buscar una fuerte presencia de la inversión privada.

Es importante resaltar que el país no posee un solo recurso natural dominante (o hegemónico). Es decir, no tenemos un recurso que represente por sí solo gran parte de la economía nacional, como ocurre con el petróleo en Venezuela y Ecuador, o el gas en Bolivia. De hecho existe una importante diversificación de recursos, incluso al interior del sector minero-energético. En segundo lugar, no todos los aprovechamientos de los recursos naturales se pueden integrar con la misma facilidad al mercado internacional. El pequeño tamaño del mercado interno peruano obliga a que buena parte de la inversión extranjera justifique su presencia en la perspectiva de colocar los productos del aprovechamiento de los recursos naturales en otros mercados. Por lo tanto, los recursos minerales y los hidrocarburos, los productos de la agroindustria, la harina de pescado y los derivados de la coca y las especies silvestres mismas con utilidad para las industrias de los mercados más grandes, resultan ser los productos más “globalizados”. No sucede lo mismo con los bosques naturales, ni con la mayor parte de los productos de la agricultura de pequeña escala. Es interesante observar, como lo resalta Ráez, que la infraestructura productiva también puede formar parte de este proceso, al ofrecer a otros países con mercados más grandes (el Brasil), algunos bienes que nosotros tenemos (energía, acceso al Pacífico, atractivos turísticos).

Otra característica importante, es que los recursos naturales están desperdigados de forma amplia y diversa en el territorio nacional. Hay petróleo en el zócalo continental y en la amazonía, recursos minerales en la ceja de selva y en los páramos, en zonas de puna y en los ríos de la selva baja. Finalmente, la concentración de los derechos para aprovechar los recursos naturales también es diversa, así como las características de estos derechos y la forma como se otorgan (o no). Son muchos actores, con muchos recursos, y bajo múltiples formas de apropiación y control.

Este escenario nos permite entender de mejor manera la forma como se comportan los mercados vinculados con los recursos naturales. No sólo los formales, hablamos incluso de actividades ubicadas en el campo de la ilegalidad. Desde luego, el primer paso es controlar el acceso a los recursos naturales necesarios. Para esto se requiere no sólo de elementos formales, sino de capacidades reales de control. La débil presencia

del Estado puede originar estrategias destinadas a asegurar el control efectivo sobre los recursos utilizando vías ubicadas incluso fuera de la ley formal, lo que incluye el uso de la coerción o la violencia.

Y esta reflexión también nos lleva a no sólo mirar los conflictos para entender la dinámica ambiente/recursos naturales, sociedad, economía. Existen muchos “acuerdos” o “negociaciones” que evitan o resuelven el conflicto, pero a costos sociales y ambientales enormes. Por ejemplo, en la minería esto puede verse reflejado tanto en el caso formal (La Oroya) como en el informal (Puno, Cono Norte de Lima, Madre de Dios). Incluso “acuerdos” como el que la población puede alcanzar con el narcotráfico ingresan en la misma categoría. El conflicto social es la expresión del fracaso en la obtención del acuerdo (no cubre ni las expectativas mínimas), o en su aplicación, o el reconocimiento de la necesidad de uno nuevo; pero no agota la discusión de fondo sobre la justicia de los acuerdos alcanzados.

El caso de la infraestructura productiva sigue el mismo patrón. Recursos naturales que buscan ser utilizados para integrarnos al mercado global, aparición de imágenes y expectativas locales (regionales, nacionales y globales) sobre los beneficios y costos del proyecto, y el inicio de un proceso de “negociación” o “búsqueda de acuerdos”. No obstante, como lo indica Ráez, la ausencia de una visión de desarrollo que incorpore una discusión de fondo sobre la relación entre ambiente/sociedad/economía, conlleva aceptar un proceso fragmentado, tanto en la aparición de conflictos y su solución, como de las estrategias del Estado para enfrentarlos. El peor resultado, al final, puede ser la violencia. Pero aún sin ella, el “acuerdo” puede conllevar la afectación de derechos y la consolidación de arreglos injustos. Esta es una discusión que necesitamos alentar insistentemente.

Comentarios

Eduardo Gudynas

Comenzando por una introducción metodológica conceptual, Ernesto Ráez Luna aborda en su trabajo especialmente dos estudios de caso, vinculados con la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y la construcción de represas. Luego finaliza con una serie de sugerencias para la investigación. Su punto de vista parte de la ecología política y del enfoque ecosistémico; es un trabajo multidisciplinario en la que la ecología se cruza con nuevas disciplinas. Este es un aspecto muy importante, un tipo de actividad que apoyo calurosamente. Esa postura multidisciplinaria abre las puertas para muchas sugerencias y aportes. En este comentario me concentraré solo en algunos puntos que son los que considero más interesantes del libro y también para la audiencia.

Una primera conclusión es que hay una confusión sobre lo que es un conflicto ambiental, un tema que me parece que no queda resuelto. Incluso si se considera el trabajo anterior* en la que se ofreció una definición de conflicto, y se trata de incluir en esa definición a los componentes ambientales, esto no funciona. Por ejemplo, se decía en este trabajo anterior que un conflicto es aquel que se tiene por un bien escaso material o inmaterial, y que involucra una disputa de poder y prestigio. Por lo menos en el área ambiental esta definición no funciona, debido a que hay disputas ambientales por percepciones o valoraciones de cómo se entiende la relación con el ambiente o el uso del ambiente que no necesariamente se relacionan con bienes o recursos escasos. En el caso de la carretera interoceánica, no hubo grandes alzamientos populares en contra, y buena parte de la crítica proviene de algunas ONG y de grupos académicos, entre otros.

* Referido a la ponencia de Víctor Caballero “Los Conflictos Sociales y socio-ambientales en el sector rural y su relación con el desarrollo rural. Notas para un balance de investigaciones” presentada en el Seminario SEPIA XIII en la ciudad del Cuzco en agosto del 2009.

Hay tres formas muy distintas de entender la ecología política, que tienen ciertas proposiciones que se mezclan todo el tiempo.

Hay una manera de abordar la ecología política atendiendo a las interacciones entre la sociedad y el ambiente, que guarda una estrecha relación con disciplinas como la ecología humana, la ecología social, la antropología ecológica y la geografía ecológica. Luego hay una segunda postura, que podría llamarse la política sobre los temas ambientales. Esta es la postura que adopta un politólogo cuando analiza, por ejemplo, el papel del Estado y de los partidos políticos o grupos sociales, y si abordan o no lo temas ambientales. Allí los compañeros de ruta son la teoría y la filosofía políticas. En esta versión de la ecología política hay un problema que Ernesto conoce, debido a que cuando se introducen los temas ambientales en la vorágine de la ciencia política, la ciencia política convencional no sirve y se deben introducir cambios. Entonces se debe diseñar otro tipo de ciencias políticas para poder analizar los temas ambientales.

Finalmente, hay un tercer campo que sería la plataforma o agenda de temas de política ambiental. Esta es una agenda o un decálogo de posturas y reclamos; por ejemplo, está la ecología política para proteger tal o cual sitio.

Para avanzar habría que definir en cuál de estos tres campos estamos, lo cual no está muy claro en la ponencia. Asimismo, presumo que algunas posiciones de Ernesto provocarán muchos cuestionamientos entre los colegas politólogos.

En la ponencia hay una frase discutible: se dice que la ecología política tiene un fuerte sesgo populista, y eso es algo muy arriesgado. Al menos en los países con gobiernos progresistas, hay una discusión muy vigorosa sobre el populismo, tanto con posturas a favor como en contra. Pero más allá de entrar en ese debate, las exigencias de los temas ambientales están bastante reñidas con cualquiera de las acepciones del populismo, ya que la demanda ecológica apunta a que mucha gente tendrá que reducir sus patrones de consumo (o sus aspiraciones de consumo), y además, a que habrá ciertas áreas que serán intocadas. Los temas ambientales tienen un fuerte componente de deberes éticos con la naturaleza y eso los aleja de cualquier tipo de populismo.

Después, Ernesto dice algo muy interesante: afirma que todas estas cuestiones se reflejan en los conflictos socioambientales que se viven hoy en día en el Perú. Esta es una idea que comparto. Se utiliza entonces una aproximación relacional, lo que es muy positivo y abre la puerta a una serie de aportes.

Otra contribución interesante, incluso tal vez audaz, es apostar por los paisajes sostenibles, los que se lograrían por arreglos del uso de la tierra a lo largo del tiempo donde no se observe una erosión biofísica o social. Esta es una discusión que data

de mediados de la década del ochenta y principios de la del noventa, especialmente cuando cambió el paradigma de la ecología y se abandonaron los modelos de sucesión ecológica. Por lo tanto, es todo un problema delimitar qué es un paisaje sostenible, y más aún, plantear a la sociedad cuáles son las intervenciones permitidas para determinar si algo es sostenible o no lo es. En esas posturas hay una serie de elementos muy jugosos para abordar el área amazónica, tales como qué es un área amazónica natural o silvestre. En casi todos los sitios hay una interferencia de los humanos, y por lo tanto hay que ver quién determina que es lo que se protege y lo que no. Esto puede convertirse en una trampa porque se equipara una meta ambiental con una social. Incluso puede haber ecosistemas artificiales, con pinos o eucaliptos, que terminen repitiendo las funciones básicas de un ecosistema silvestre original, con lo que la discusión se torna aún más difícil.

El planteamiento central de la ponencia de Ernesto es que “la batalla final es en la Amazonía”. Se abordan varios temas interesantes; por ejemplo, cuando se dice que la globalización promueve transformaciones marcadas por la simplificación de la diversidad ideológica y la homogeneización cultural. Estoy bastante de acuerdo con eso, pero para complicarle la vida a Ernesto, diré que hay un estilo y un modo de desarrollo que a su vez generan esa globalización y también la simplificación de los ecosistemas y la homogeneización cultural. No creo que la globalización sea la causa, creo que ella es también una consecuencia, y como bien se dice en el trabajo, la raíz de todo esto tiene que ver con ciertas ideas del desarrollo y de la modernidad. Entonces se cita a mi amigo Arturo Escobar con sus críticas de desarrollo; todos estamos más o menos de acuerdo en que las estrategias de desarrollo convencionales son muy malas, no han funcionado por su propio colapso o por la crisis que se está viviendo en la actualidad. Incluso no se han cumplido las promesas de beneficio social y económico de las que estas estrategias hablaban. En ese sentido, Escobar cumplió su meta de poner en discusión la idea y de cuestionarla por su vinculación con cierta forma de concebir el saber. Ahora bien, esa propuesta de desarrollo convencional no funcionó; incluso la palabra desarrollo no sirve. Pero así como se reconoce esto, tenemos que pensar qué hacemos con las comunidades locales que de todas maneras tienen ciertas necesidades, como saneamiento o vivienda, y a las cuales les tendremos que poner otro nombre.

Persiste el problema de cómo se van a utilizar los recursos, cuál va a ser el papel del Estado, el de la sociedad, etc. Necesitamos tal vez otra palabra para nombrar este concepto. Seguramente hay allí una gran veta para que ustedes pregunten a los vecinos, y esa es un área que Ernesto insinúa al tratar el cambio sustancial que ha habido en Ecuador con la aprobación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de ese país. Esta reconceptualización es muy valiosa, en especial por su vínculo con el “buen vivir” —más allá de cómo se defina ese concepto, aunque ya sabemos que sirve para

no quedar atado al mito del desarrollo y para crear una nueva agenda de discusión. Para terminar, Ernesto hace una serie de interesantes sugerencias sobre cuestiones de investigación. Por ejemplo, cuál es el rol de la política en los recursos naturales y qué papel tienen los partidos políticos, porque en el Perú ellos no funcionan como intermediarios en la discusión de los temas ambientales. Es muy interesante que esto último no se mencione como uno de los agujeros negros de la política.

Otro tema sugestivo es por qué los conflictos ambientales se mantienen más o menos aislados y cómo no queda clara su vinculación con otro tipo de conflictos. Un día estallan en un lugar del país, al día siguiente en otro y a veces son violentos. Pareciera que tienen un pico de erupción y que después desaparecen. ¿Por qué se sigue esa dinámica? ¿Por qué no hay un ejercicio de aprendizaje compartido entre los actores sociales para poder sacar provecho de ellos? Y es que la política ambiental no puede ser sólo conflictos; es importante advertir que la gente se cansa, y que la construcción política no se genera únicamente sobre la base de los conflictos. Los conflictos no pueden ser endémicos, constantes, repetidos. Tiene que haber un tiempo de construcción, pausas para el diálogo, un período de preparación de agendas comunes. Por lo tanto, hay que analizar cómo pasar a esa otra fase.

Notas sobre los Autores

Ernesto F. Ráez Luna, M.A.

Director de Ciencia y Desarrollo, Centro para la Sostenibilidad Ambiental – Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA).

Intereses profesionales:

Ecología tropical, enfoque ecosistémico y ecología política.

Biólogo (Universidad Nacional Agraria “La Molina”) y *Master of Arts* en Estudios Latinoamericanos, con concentración en Conservación Tropical y Desarrollo (Universidad de Florida, Gainesville, EEUU). Estudios de postgrado en la Universidad de British Columbia (Canadá), donde investigó la ecología política del sector forestal peruano.

Fue Investigador Asociado del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Lideró proyectos de conservación y desarrollo en Colombia (Fundación Natura) y Perú (Conservación Internacional y Fundación ProNaturaleza). Coordinó el proyecto binacional Tambopata-Madidi, financiado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), la Mesa de Conservación Ambiental de la Iniciativa Trinacional MAP (Madre de Dios-Peru / Acre-Brasil / Pando-Bolivia) y la región Andes Tropicales de la Iniciativa TEAM (*Tropical Ecology, Assessment & Monitoring*) en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Miembro de la *Network for Ecosystem Sustainability and Health* (NESH, Canadá), de la Comisión de Políticas Ambientales, Económicas y Sociales (CEESP) de la UICN, de la Articulación Regional Amazónica (ARA), de la Alianza Estudios Críticos sobre Desarrollo, del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), del Grupo Peruano de Interés en IIRSA y del Comité Consultivo de la Comisión de Ambiente

y Ecología del Congreso de la República. Coordinador del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Carretera Interoceánica Sur. Desde el CSA, lidera el programa de Conservación de Cabeceras Amazónicas y los proyectos “Observatorio del Fuego” y “Áreas Silvestres Regionales en Madre de Dios”. El año 2008, recibió el Premio Whitley a la Conservación de la Naturaleza, de manos de Su Alteza Real, la Princesa Ana del Reino Unido.

Correo electrónico:
eraez@csa-upch.org

Ivan Kriss Lanegra Quispe

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú

Profesor de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Sus áreas de interés y especialización son:
Política y Derecho Ambiental. Teoría Política.

Correo electrónico:
ilanegra@pucp.edu.pe

Eduardo Gudynas

M Sc Ciencias, opción ecología social, Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura - Roma, y Multiversidad Franciscana de América Latina, Montevideo.

Secretario Ejecutivo, Centro Latino Americano Ecología Social, CLAES, Montevideo.

Su área de interés y especialización es:
Desarrollo sostenible

Correo electrónico:
egudynas@ambiental.net



ISBN: 978-612-45829-1-2



9 786124 582912